

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

25ª REUNIÓN — 16ª SESIÓN ORDINARIA — 23 DE SEPTIEMBRE DE 1992

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor **EDUARDO MENEM**,

del señor vicepresidente del Honorable Senado,
don **ORALDO N. BRITOS**,

y del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado,
doctor **LUIS AGUSTÍN LEÓN**

Secretarios: doctor **EDGARDO RENÉ PIUZZI** y **EDGARDO P. V. MURGUÍA**

Prosecretarios: señor **JUAN JOSÉ CANALS** y doctor **DONALDO ANTONIO DIB**

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
BENÍTEZ, Alfredo L.
BITTEL, Deolindo F.
BRASESCO, Luis A. J.
BRAVO, Leopoldo
BRAVO HERRERA, Horacio F.
BRITOS, Oraldo N.
CENDOYA, Jorge J.
CONCHEZ, Pedro A.
FIGUEROA, José O.
GASS, Adolfo
GENOUD, José
GURDULICH de CORREA, Liliana I.
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo I.
JUÁREZ, Carlos A.
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
LEÓN, Luis A.
LOSADA, Mario A.
MALHARRO de TORRES, Margarita
MARTÍNEZ, Daniel E.
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo
MOLINA, Pedro E.

NIEVES, Rogelio J.
OTERO, Edison
OYARZÚN, Juan C.
POSLEMAN, Eduardo A.
RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO FERIS, José A.
RUBEO, Luis
SAADI de DENTONE, Alicia A.
SAPAG, Elías
SOLANA, Jorge D.
STORANI, Conrado H.
VELÁZQUEZ, Héctor J.

AUSENTES, EN COMISION:

AMOEDO, Julio A.
COSTANZO, Remo J.
LUDUEÑA, Felipe E.
MAC KARTHY, César
RODRÍGUEZ SAÁ, Alberto J.
ROMERO, Juan C.
SAMUDIO GODOY, Wilfrido
SÁNCHEZ, Libardo N.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
TRIÏLLA, Juan
VACA, Eduardo P.

SUMARIO

1. Por invitación del señor presidente provisional del Honorable Senado, la señora senadora por Tucumán profesora Olijela del Valle Rivas procede al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 2601.)

2. Asuntos entrados:

- I. Comunicaciones de la Presidencia. (Pág. 2601.)
- II. Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se prorroga el plazo establecido en el capítulo I de la ley 23.696 (emergencia administrativa) (P.E.-268/92.) (Pág. 2601.)
- III. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifican diversos artículos de la ley 24.013, de empleo. (P.E.-288/92.) (Pág. 2602.)
- IV. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba la Enmienda Relativa a la Entrada en Vigor del Artículo 6º del Estatuto del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit). (P.E.-289/92.) (Pág. 2603.)
- V. Comunicaciones de la Presidencia de la Nación. (Pág. 2605.)
- VI. Proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley 19.279 (beneficios para personas lisiadas con relación a la adquisición de automotores). (C.D.-47/92.) (Pág. 2606.)
- VII. Proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley 23.298 (partidos políticos) respecto del Fondo Partidario Permanente. (C.D.-19/92.) (Pág. 2607.)
- VIII. Proyecto de ley en revisión por el que se declara de interés nacional la lucha contra la brucelosis. (C.D.-50/92.) (Pág. 2607.)
- IX. Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la Promoción y la Protección de Inversiones. (C.D.-51/92.) (Pág. 2608.)
- X. Proyecto de ley en revisión por el que se modifica el Código Penal respecto de la figura de "desacato" y se deroga el artículo 244. (C.D.-52/92.) (Pág. 2608.)
- XI. Proyecto de ley en revisión por el que se crea un fondo rotativo para créditos productivos con destino a la pequeña y mediana producción. (C.D.-53/92.) (Pág. 2608.)
- XII. Proyecto de ley en revisión por el que se incluye a los artistas plásticos ganadores del premio "Honorable Senado

de la Nación" en los términos de la ley 16.516. (C.D.-54/92.) (Pág. 2610.)

- XIII. Proyecto de ley en revisión por el que se modifican los artículos 2º y 5º de la Ley de Saneamiento Financiero entre la Nación y las provincias (24.133). (C.D.-55/92.) (Pág. 2610.)
- XIV. Modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados en el proyecto de ley federal de educación que le fuera enviado en revisión. (S.-1/90, P.E.-327/90, S.-995, 1.275 y 1.380/91.) (Pág. 2611.)
- XV. Proyecto de ley en revisión por el que se modifica el Código Civil en cuanto al régimen de minoridad. (C.D.-58/92.) (Pág. 2622.)
- XVI. Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 2623.)
- XVII. Comunicaciones de señores senadores. (Pág. 2624.)
- XVIII. Comunicaciones oficiales. (Pág. 2624.)
- XIX. Dictámenes de comisiones. (Pág. 2626.)
- XX. Peticiones particulares. (Pág. 2631.)
- XXI. Proyecto de comunicación del señor senador Romero Feris por el que se solicita se solucione la problemática de las economías regionales y del campo argentino. (S.-724/92.) (Pág. 2632.)
- XXII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita el saneamiento de los cauces pluviales y afluentes de diversos ríos en Buenos Aires. (S.-725/92.) (Pág. 2632.)
- XXIII. Proyecto de comunicación del señor senador Oyarzún por el que se solicita se prohíba el paso por aguas argentinas de un buque japonés con cargamento de plutonio. (S.-726/92.) (Pág. 2633.)
- XXIV. Proyecto de declaración del mismo señor senador por el que se repudia un atentado con explosivos perpetrado contra el domicilio del secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. (S.-727/92.) (Pág. 2634.)
- XXV. Proyecto de resolución de la señora senadora Rivas por el que se manifiesta preocupación por la decisión de los Estados Unidos de América de subsidiar exportaciones de trigo. (S.-728/92.) (Pág. 2634.)
- XXVI. Proyecto de ley del señor senador Sánchez por el que se establece un régimen para el funcionamiento de los hoteles al aire libre o campamentos. (S.-729/92.) (Pág. 2635.)
- XXVII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Saadi de Dentone por

63. Consideración del dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Ludueña por el que se solicita se extremen las medidas de control sobre las industrias ubicadas en la cuenca del río Reconquista. (S.-658/92.) Se aprueba. (Pág. 2770.)
64. Consideración del dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano en el proyecto de declaración del señor senador Oyarzún por el que se declara de interés nacional del Honorable Senado la realización de la I Fiesta Provincial y Nacional del Medio Ambiente. ECO Ushuaia 92. (S.-592/92.) Se aprueba su pase al archivo. (Pág. 2771.)
65. Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públicas, de Transportes y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Aguirre Lanari por el que se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a disponer la construcción de un nuevo puente que unirá las provincias de Corrientes y Entre Ríos. (S.-332/92.) Se aprueba. (Pág. 2772.)
66. Consideración del dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Ludueña por el que se solicita un subsidio para la Municipalidad de Puerto Santa Cruz. (S.-689/92.) Se aprueba. (Pág. 2773.)
67. Consideración del dictamen de las comisiones de Economía y de Presupuesto y Hacienda en las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto que le fuera pasado en revisión sobre Ley Orgánica del Banco Central de la República Argentina. (S.-719/91.) Se aprueba. (Pág. 2774.)
68. A moción del señor senador Rubeo se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones un proyecto de ley presentado por señores senadores de distintos bloques del Honorable Senado vinculado con la transferencia gratuita de inmuebles estatales en favor de provincias, municipios y comunas. (S.-785/92.) (Pág. 2800.)
69. Lectura de la nómina de miembros propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar la Cámara Nacional de Casación Penal, acerca de los cuales se solicita acuerdo. Se remite a la Comisión de Acuerdos. (P.E.-290 a 302/92.) (Pág. 2811.)
70. Consideración del dictamen de las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de comunicación de los señores senadores Cass, Malharro de Torres y Genoud por el que se solicita se declare el estado de desastre y la emergencia agropecuaria en varios distritos de la provincia de Mendoza. (S.-1.203/91.) Se aprueba. (Pág. 2812.)
71. Moción de los señores senadores Storani y Britos de pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 12. Se aprueba. (Pág. 2814.)
72. Apéndice:

I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 2814.)

II. Inserciones. (Pág. 2819.)

—En Buenos Aires, a las 17 y 16 del miércoles 23 de septiembre de 1992.

Sr. Presidente (Menem). — La sesión está abierta.

I

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Menem). — Invito a la señora senadora por Tucumán doña Olijela del Valle Rivas a izar la bandera nacional en el mástil del recinto, y a los presentes a ponerse de pie.

— Puestos de pie los presentes, la señora senadora Rivas procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se va a dar cuenta de los asuntos entrados. Oportunamente se hizo llegar a los señores senadores la nómina de los expedientes ingresados desde la última sesión. Este es el momento en que deben hacer las observaciones que estimen pertinentes.

— La nómina de los asuntos entrados, con las observaciones formuladas, es la siguiente:

I

Comunicaciones de la Presidencia

Decreto del 25 de agosto por el que se autoriza a la señora senadora Saadi de Dentone a viajar a San Pablo, Brasil, desde el 27 al 31 de agosto, para participar de la "2da. Reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Latinoamericano". (D.P.-616/92.) (A sus antecedentes.)

— Decreto del 9 de septiembre por el que se autoriza a los señores senadores Aguirre Lanari y Rodríguez Saá a viajar a Cambridge, Gran Bretaña, desde el 16 al 23 de septiembre, para participar de la 3ª Conferencia Argentino-Británica. (D.P.-629/92.) (A sus antecedentes.)

— Decreto de la misma fecha por el que se autoriza al señor senador Sánchez a viajar a Wistler, Canadá, desde el 16 al 23 de septiembre, para participar en el Congreso Mundial de Turismo de Aventura y Ecología. (D.P.-630/92.) (A sus antecedentes.)

— Decreto de la misma fecha por el que se autoriza a los señores senadores Mac Karthy y Ludueña a viajar a Madrid, España, desde el 20 al 25 de septiembre, para participar del XV Congreso Mundial de Energía. (D.P.-631/92.) (A sus antecedentes.)

— Decreto del 23 de septiembre por el que se adhiere al sentimiento de pesar causado por el fallecimiento del senador (m.c.) Tomás Pedro Arana. (D.P.-634/92.) (A sus antecedentes.)

La otra actividad importante, la de los servicios a cargo del Estado nacional, provincial y municipal, ha visto reducidos sus presupuestos de gastos como consecuencia del ajuste y el sinceramiento que ha tenido nuestra economía en todos los órdenes.

Esta situación deja sin recursos suficientes a la municipalidad para encarar una obra de relleno sanitario que está necesitando Puerto Santa Cruz, máxime cuando la acumulación de residuos domiciliarios, y los desechos del matadero están poniendo en peligro la salud de sus habitantes y las condiciones ecológicas tanto de la ría como de la zona de playa.

Las necesidades económicas que fueron justipreciadas para transformar el depósito de residuos en una zona recuperada será de cien mil pesos, ya que será necesario realizar profundas zanjias donde se colocarán los residuos para luego taparlos, forestarlos y acondicionarlos para uso recreativo.

El monto aquí requerido será para cubrir solamente los gastos de mano de obra, combustibles, lubricantes, repuestos de máquinas y alquiler de camiones, ya que la municipalidad cuenta con el equipamiento de máquinas necesarias para este fin.

El mayor esfuerzo que está realizando actualmente la comuna es en procura de radicaciones industriales que generen bienes, y en todo proceso industrial existe siempre un remanente no deseado de polución ambiental en sus residuos que las empresas en general no lo tratan, pues ello siempre produce gastos.

La Municipalidad de Puerto Santa Cruz sabe, que en esta materia tan delicada para la calidad de vida de sus conciudadanos, para exigir la preservación del ambiente debe necesariamente exigirse, y ése es hoy su principal cometido.

Felipe Ludueña.

Sr. Presidente (Britos). — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Britos). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

67

LEY ORGANICA DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Sr. Presidente (Britos). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Economía y de Presupuesto y Hacienda en las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados en el proyecto que le fuera pasado en revisión sobre Ley Orgánica del Banco Central de la República Argentina.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuze). — (Lee)

Dictamen de comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Economía y de Presupuesto y Hacienda han considerado las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre Ley Orgánica del Banco Central de la República Argentina y derogando la ley 20.539 y sus modificatorias (S.-719/91); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su aceptación.

De conformidad con el artículo 117 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 11 de septiembre de 1992.

Juan Trilla. — Juan C. Romero. — Alberto J. Rodríguez Saá. — Pedro E. Molina. — Eduardo P. Vaca. — José O. Figueroa. — Luis Rubeo. — Felipe Ludueña.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(5 de agosto de 1992)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Sustitúyese la ley 20.539 y sus modificatorias, carta orgánica del Banco Central de la República Argentina, la que quedará redactada de la siguiente manera:

REGIMEN GENERAL

CAPÍTULO I

Naturaleza y objeto

Artículo 1º: El Banco Central de la República Argentina es una entidad autárquica del Estado nacional, regida por las disposiciones de la presente ley y demás normas legales concordantes.

Artículo 2º: El Banco Central de la República Argentina tendrá su domicilio en la capital de la República Argentina. Podrá establecer agencias y nombrar corresponsales en el país y en el exterior.

Artículo 3º: Es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda.

El banco deberá desarrollar una política monetaria y financiera dirigida a salvaguardar las funciones del dinero como reserva de valor, unidad de cuenta e instrumento de pago para cancelar obligaciones monetarias, en un todo de acuerdo con la legislación que dicte el Honorable Congreso de la Nación.

En la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el Banco Central no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional.

El Banco Central no podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionar,

restringir o delegar sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación, el ejercicio de sus facultades legales.

El Estado nacional garantiza las obligaciones asumidas por el banco.

Artículo 4º: Son, además, otras funciones del Banco Central de la República Argentina:

- a) Regular la cantidad de dinero y observar la evolución del crédito en la economía;
- b) Vigilar el buen funcionamiento del mercado financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras y demás normas que, en su consecuencia, se dicten;
- c) Actuar como agente financiero del Estado nacional, asesor económico, financiero, monetario y cambiario del Poder Ejecutivo nacional, y depositario y agente del país ante las instituciones monetarias, bancarias y financieras internacionales a las cuales la Nación haya adherido;
- d) Concentrar y administrar, en su carácter de agente financiero del Estado nacional, sus reservas de oro, divisas y otros activos externos;
- e) Propender al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales;
- f) Establecer y ejecutar la política cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación que sancione el Honorable Congreso.

CAPÍTULO II

Capital

Artículo 5º: El capital del banco quedará establecido en el balance inicial que se presentará al momento de promulgarse la presente ley. Al final de cada ejercicio anual el directorio procederá a su ajuste, capitalizando las ganancias líquidas y realizadas, si las hubiere.

CAPÍTULO III

Directorio

Artículo 6º: El banco estará gobernado por un directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente y ocho directores. Todos ellos deberán ser argentinos nativos o por naturalización, con no menos de diez (10) años de ejercicio de la ciudadanía. Deberán tener probada idoneidad en materia monetaria, bancaria, o legal vinculada al área financiera y gozar de reconocida solvencia moral.

Artículo 7º: El presidente, el vicepresidente, y los directores serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado de la Nación, durarán seis (6) años en sus funciones, pudiendo ser designados nuevamente. Dicho período será contado a partir de la sanción de la presente ley.

Las retribuciones del presidente, el vicepresidente y los directores serán las que fije el presupuesto del banco.

Artículo 8º: No podrán desempeñarse como miembros del directorio:

- a) Los empleados o funcionarios de cualquier repartición del gobierno nacional y los que tuvieren otros cargos o puestos rentados o remunerados en cualquier forma, que dependiesen directa o indirectamente de los gobiernos nacional, provinciales o municipales, incluidos sus poderes legislativos y judiciales. No se encuentran comprendidos en las disposiciones de este inciso quienes ejercen la docencia;
- b) Los accionistas, o los que formen parte de la dirección, administración, sindicatura o presten servicios a las entidades financieras al momento de su designación;
- c) Los que se encuentren alcanzados por las inhabilidades establecidas en la Ley de Entidades Financieras.

Artículo 9º: Los integrantes del directorio podrán ser removidos de sus cargos, por el Poder Ejecutivo nacional, por incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente carta orgánica o por incurrir en alguna de las inhabilidades previstas en el artículo anterior.

La remoción de los miembros del directorio será decretada por el Poder Ejecutivo nacional cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, debiéndose contar para ello con el previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación. La misma será presidida por el presidente de la Cámara de Senadores e integrada por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía de la misma y por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación.

Atribuciones del presidente

Artículo 10: El presidente es la primera autoridad ejecutiva del banco y, en tal carácter:

- a) Ejerce la administración del banco;
- b) Actúa en representación del directorio y convoca y preside sus reuniones;
- c) Vela por el fiel cumplimiento de esta carta orgánica y demás leyes nacionales y de las resoluciones del directorio;
- d) Ejerce la representación legal del banco en sus relaciones con terceros;
- e) Propone al Poder Ejecutivo nacional la designación del superintendente y vicesuperintendente de entidades financieras y cambiarias, los que deberán ser miembros del directorio;
- f) Participa con carácter consultivo en las reuniones convocadas por el Poder Ejecutivo nacional para discutir temas vinculados a asuntos de importancia para la política monetaria, cambiaria y financiera;
- g) Nombra, promueve y separa al personal del banco de acuerdo con las normas que dicte

el directorio, dándole posterior cuenta de las resoluciones adoptadas;

- h) Disponer la sustanciación de sumarios al personal cualquiera sea su jerarquía, por intermedio de la dependencia competente;
- i) Deberá presentar un informe anual sobre las operaciones del banco al Honorable Congreso de la Nación. A su vez deberá comparecer ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de ambas Cámaras, de Economía del Senado de la Nación y de Finanzas de la Cámara de Diputados, en sesiones públicas y conjuntas de las mismas, por cada una de las Cámaras, al menos una vez durante el período ordinario, a los efectos de informar sobre los alcances de las políticas monetarias, cambiarias y financieras en ejecución.

Artículo 11: Cuando razones de urgencia fundadas así lo exijan, el presidente podrá asimismo, resolver asuntos reservados al directorio, en consulta con el vicepresidente, o quien haga sus veces y por lo menos un director, debiendo dar cuenta a ese cuerpo, en la primera oportunidad que el mismo se reúna, de las resoluciones adoptadas en esta forma. De la misma facultad gozará quien lo reemplace.

Las resoluciones según lo indicado precedentemente no relevarán a los demás directores de las responsabilidades que les correspondieren salvo su expresa oposición al tiempo de serles informadas.

Artículo 12: El presidente convocará a las reuniones del directorio por lo menos una vez cada quince (15) días. Cinco (5) miembros formarán quórum y, salvo disposición en contrario, las resoluciones serán adoptadas por simple mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate el presidente tendrá doble voto. Por vía de reglamentación podrá el directorio establecer el requisito de mayorías más estrictas en asuntos de singular importancia.

El ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos del Poder Ejecutivo nacional, o su representante, puede participar con voz, pero sin voto, en las sesiones del directorio.

Artículo 13: El vicepresidente ejercerá las funciones del presidente en el caso de ausencia o impedimento o vacancia del cargo. Fuera de dichos casos, desempeñará las que el presidente —de entre las propias— le asigne o delegue.

El directorio nombrará un vicepresidente 2º entre sus miembros, quien sustituirá al vicepresidente en caso de ausencia temporaria o cuando ejerza la presidencia.

Si el presidente, el vicepresidente o alguno de los directores falleciere, renunciare o de alguna otra forma dejare vacante su cargo antes de terminar el período para el cual fue designado, se procederá a nombrar a su reemplazante, para completar el período, en la forma establecida en el artículo 7º.

Atribuciones del directorio

Artículo 14: El directorio determina la ejecución de la política monetaria y financiera del banco, aten-

diendo a lo establecido en el artículo 3º. Corresponde asimismo al directorio:

- a) Intervenir en las decisiones que afecten al mercado monetario y cambiario, estando facultado para obtener en ambos mercados;
- b) Prescribir requisitos de encaje, sujeto a las condiciones establecidas en el artículo 28;
- c) Fijar las tasas de interés y demás condiciones generales de las operaciones crediticias del banco, las que no podrá implicar la concesión de algún tipo de subsidio;
- d) Establecer relaciones técnicas de liquidez y solvencia para las entidades financieras;
- e) Efectuar el ajuste del capital del banco de acuerdo a lo establecido por el artículo 5º;
- f) Determinar las sumas que corresponde destinar a reservas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38;
- g) Fijar políticas generales que hacen al ordenamiento económico y a la expansión del sistema financiero, las que deberán ser observadas por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias;
- h) Revocar la autorización para operar de las entidades financieras y cambiarias. Por sí, o a pedido del superintendente;
- i) Ejercer las facultades y poderes que asigna al banco esta ley y sus normas concordantes;
- j) Reglamentar la creación y funcionamiento de cámaras compensadoras de cheques y de otros valores que organicen las entidades financieras;
- k) Establecer las denominaciones y características de los billetes y monedas;
- l) Disponer la desmonetización de los billetes y monedas en circulación y fijar los plazos en que se producirá su canje;
- m) Establecer las normas para la organización y gestión del banco; tomar conocimiento de las operaciones decididas con arreglo a dichas normas e intervenir, según la reglamentación que dicte, en la resolución de los casos no previstos;
- n) Resolver sobre todos los asuntos que, no estando explícitamente reservados a otros órganos, el presidente del banco someta a su consideración;
- ñ) Autorizar la apertura de nuevas entidades financieras o cambiarias y la de filiales o sucursales de entidades financieras extranjeras;
- o) Autorizar la apertura de sucursales de entidades financieras y los proyectos de fusión de las mismas;
- p) Aprobar las transferencias de acciones que según la Ley de Entidades Financieras requiera autorización del banco.

Artículo 15: Como órgano de gobierno del banco, le corresponde al directorio:

- a) Dictar el estatuto del personal del banco, fijando las condiciones de su ingreso, perfeccionamiento técnico y separación;
- b) Designar a los subgerentes generales a propuesta del presidente del banco;
- c) Crear y suprimir agencias;
- d) Nombrar corresponsales;
- e) Elaborar y remitir al Honorable Congreso de la Nación para su aprobación antes del 30 de septiembre de cada año, el presupuesto anual de gastos, el cálculo de recursos y los sueldos del personal, tanto para el banco como para la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias;
- f) Aprobar el balance general, la cuenta de resultados y la memoria.

CAPÍTULO IV

Administración general del banco

Artículo 16: La administración del banco será ejercida por intermedio de los subgerentes generales, los cuales deberán ser argentinos nativos o por naturalización, con no menos de diez (10) años de ejercicio de la ciudadanía. Deberán reunir los mismos requisitos de idoneidad que los directores.

Los subgerentes generales son los asesores del presidente y del directorio. En ese carácter asistirán a sus reuniones, a pedido del presidente o del directorio. Dependen funcionalmente del presidente o del funcionario que éste designe, que actuará en esta función con el nombre de gerente general.

Son responsables del cumplimiento de las normas, reglamentos y resoluciones del directorio y del presidente, para cuya aplicación, previa autorización por el mismo, podrán dictar las reglamentaciones internas que fueren necesarias. Asimismo, deberán mantener informado al presidente sobre la marcha del banco.

CAPÍTULO V

Operaciones del banco

Artículo 17: El banco está facultado para realizar las siguientes operaciones:

- a) Emitir billetes y monedas conforme a la delegación de facultades realizada por el Honorable Congreso de la Nación;
- b) Otorgar redescuentos a las entidades financieras por razones de iliquidez transitoria, que no excedan los treinta (30) días corridos, hasta un máximo por entidad equivalente al patrimonio de ésta;
- c) Otorgar adelantos en cuenta a las entidades financieras por iliquidez transitoria, que no excedan los treinta (30) días corridos, con caución de títulos públicos u otros valores, o con garantía o afectación especial o general sobre activos determinados, siempre y

cuando la suma de los redescuentos y adelantos concedidos a una misma entidad no supere, en ninguna circunstancia, el límite fijado por el inciso anterior;

- d) Las derivadas de convenios internacionales en materia de pagos.

Los recursos que se proporcionen a las entidades financieras a través de los regímenes previstos en los incisos b) y c) precedentes, bajo ninguna circunstancia podrán carecer de garantías o ser otorgados en forma de descubierto en cuenta corriente.

Los valores que en primer lugar se deberán afectar como garantía de estas operaciones serán aquellos que tengan oferta pública y serán valorados según su cotización de mercado.

Los recursos que se proporcionen a las entidades financieras a través de los regímenes previstos en los incisos b) y c) precedentes, podrán ser renovados luego de transcurrido un período de cuarenta y cinco (45) días desde su cancelación.

Artículo 18: El banco podrá:

- a) Comprar y vender a precios de mercados, en operaciones de contado y a término, títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de regulación monetaria y cambiaria;
- b) Obtener créditos desde el exterior;
- c) Comprar y vender oro y divisas. En caso que lo haga por cuenta y orden del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en su carácter de agente financiero del Estado nacional, las pérdidas o utilidades que se generen deberán ser acreditadas o debitadas al gobierno nacional;
- d) Recibir oro en custodia;
- e) Actuar como corresponsal o agente de otros bancos centrales, o representar o formar parte de cualquier entidad de carácter internacional existente o que se cree con el propósito de cooperación bancaria, monetaria o financiera;
- f) Recibir depósitos en moneda nacional o extranjera.

Artículo 19: Queda prohibido al banco:

- a) Conceder préstamos al gobierno nacional, a los bancos, provincias y municipalidades, excepto lo prescrito en el artículo 20;
- b) Garantizar o endosar letras y otras obligaciones del gobierno nacional, de las provincias, municipalidades y otras instituciones públicas;
- c) Conceder préstamos a personas físicas o jurídicas no autorizadas para operar como entidades financieras;
- d) Efectuar redescuentos, adelantos u otras operaciones de crédito, excepto en las previstas por el artículo 17, incisos b) y c), los que eventualmente pudieran transitoriamente originarse en operaciones de mercado previstas en el artículo 18, inciso a);

- e) Comprar y vender inmuebles, con la excepción de aquellas operaciones que sean necesarias para el normal funcionamiento del banco;
- f) Comprar acciones salvo las emitidas por organismos financieros internacionales;
- g) Participar directa o indirectamente en cualquier empresa comercial, agrícola, industrial o de otra clase;
- h) Colocar sus disponibilidades en moneda nacional o extranjera en instrumentos que no gocen sustancialmente de inmediata liquidez;
- i) Emitir títulos, bonos o certificados de participación, de colocación o de cumplimiento obligatorio para las entidades financieras;
- j) Pagar intereses en cuentas de depósitos;
- k) Otorgar garantías especiales que directa o indirectamente, implícita o explícitamente, cubran obligaciones de las entidades financieras, incluso las originadas en la captación de depósitos.

Artículo 20: El banco sólo podrá financiar al gobierno nacional a través de la compra, a precios de mercado, de títulos negociables emitidas por la Tesorería General de la Nación.

El crecimiento de las tenencias de títulos públicos del banco, a valor nominal, no podrá ser superior al diez por ciento (10%) por años calendario, ni superar el límite máximo dispuesto en el artículo 33.

Artículo 21: El banco, directamente o por medio de las entidades financieras, se encargará de realizar las remesas y transacciones bancarias del gobierno nacional, tanto en el interior del país como en el extranjero, recibirá en depósito los fondos del gobierno nacional y de todas las reparticiones autárquicas y efectuará pagos por cuenta de los mismos, sujeto a lo establecido en el artículo anterior.

El banco no pagará interés alguno sobre las cantidades depositadas en la cuenta del gobierno nacional ni percibirá remuneración por los pagos que efectúe por su cuenta pero podrá cargarle los gastos que a su vez haya pagado a las entidades financieras.

El banco podrá disponer el traspaso de los depósitos del gobierno nacional y los de entidades autárquicas a las entidades financieras. Podrá, asimismo, encargar a los bancos la realización de las operaciones bancarias de cualquier índole del gobierno nacional y de las reparticiones o empresas del Estado nacional.

Artículo 22: El banco actuará por cuenta del gobierno nacional en la colocación de empréstitos públicos de cualquier clase y plazo y en la atención de los servicios de la deuda pública interna y externa.

En su carácter de agente financiero del Estado nacional, el banco podrá reemplazar por valores escriturales, los títulos cuya emisión le fuera encomendada, expidiendo certificados globales. En tal caso los valores deberán registrarse en los respectivos entes autorizados por la Comisión Nacional de Valores de conformidad con las disposiciones de la

ley 20.643 y sus modificatorias. Cuando las circunstancias lo justifiquen el banco podrá extender certificados provisionales.

El banco podrá colocar los valores en venta directa en el mercado o mediante consorcios financieros. Podrá promover y fiscalizar el funcionamiento de éstos. No podrá tomar suscripciones por cuenta propia. Cobrará comisión por los servicios mencionados, cargando su importe a la cuenta del gobierno nacional.

Artículo 23: El banco queda facultado para convenir con los agentes fiscales o pagadores, ad referendum del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, las medidas que juzgue más convenientes para la debida atención, por cuenta del gobierno nacional, de los servicios de la deuda pública externa.

Artículo 24: El banco cargará a la cuenta del gobierno nacional el importe de los servicios de la deuda pública interna y externa atendida por su cuenta y orden, así como los gastos que dichos servicios irroguen. El gobierno nacional pondrá a disposición del banco los fondos necesarios para la atención de dichos gastos, pudiendo el banco adelantarlos dentro de las limitaciones establecidas por el artículo 20.

Artículo 25: El banco facilitará al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos el control de todos los actos relativos a la colocación de empréstitos públicos y a la atención de los servicios de la deuda pública, incluso la inutilización y destrucción de valores y la inspección de los libros, registros y demás documentos relativos a tales operaciones, debiendo suministrarle, además, una información especial y detallada concerniente a su desempeño como agente financiero del Estado.

Artículo 26: El banco deberá informar al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos sobre la situación monetaria, financiera, cambiaria, flujo de fondos, balance de pagos y del producto e ingresos nacionales, formulando en cada caso las consideraciones que estime conveniente.

Artículo 27: El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, suministrará al banco las siguientes informaciones correspondientes a cada trimestre:

- a) Movimiento de entradas y salidas de la Tesorería General de la Nación por sus distintos conceptos;
- b) Detalle de la recaudación de los recursos en efectivo y del producto de los del crédito;
- c) Gastos comprometidos, conforme lo permita la implantación de la respectiva contabilidad;
- d) Estado de la deuda consolidada y flotante, tanto interna como externa.

Aparte de dichas informaciones, el banco deberá requerir al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, como a los demás ministerios y reparticiones públicas aquellas otras que le fuesen necesarias o útiles a los fines del mejor cumplimiento de sus funciones.

CAPÍTULO VI

Efectivos mínimos

Artículo 28: Con el objeto de regular la cantidad de dinero y vigilar el buen funcionamiento del mercado financiero, el Banco Central de la República Argentina puede exigir que las entidades financieras mantengan disponibles determinadas proporciones de los depósitos y otros pasivos, denominados en moneda local o extranjera. Estos requisitos de reservas no podrán ser remunerados.

No podrá exigirse la constitución de otro tipo de depósitos indisponibles o inmovilizaciones a las entidades financieras.

La integración de los requisitos de reserva no podrá constituirse sino en dinero en efectivo o en depósitos a la vista en el Banco Central de la República Argentina, o en cuenta en divisas, según se trate de pasivos de las entidades financieras denominados en moneda local o extranjera, respectivamente.

CAPÍTULO VII

Régimen de cambios

Artículo 29: El banco deberá:

- a) Asesorar al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y al Honorable Congreso de la Nación, en todo lo referente al régimen de cambios y establecer las reglamentaciones de carácter general que correspondiesen, las que serán implementadas por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias y de alcance obligatorio para los entes públicos y privados;
- b) Dictar las normas de cambios y ejercer o hacer ejercer a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias la fiscalización que su cumplimiento exija.

CAPÍTULO VIII

Emisión de monedas y reservas en oro y divisas

Artículo 30: El banco es el encargado exclusivo de la emisión de billetes y monedas de la Nación Argentina y ningún otro órgano del gobierno nacional, ni los gobiernos provinciales, ni las municipalidades, bancos u otras instituciones cualesquiera, podrán emitir billetes ni monedas metálicas ni otros instrumentos que fuesen susceptibles de circular como moneda.

Artículo 31: Los billetes y monedas del banco tendrán curso legal, en los términos de la ley 23.928 en todo el territorio de la República Argentina por el importe expresado en ellos. Los billetes llevarán el facsímil de la firma del presidente del banco, acompañada de la del presidente de la Honorable Cámara de Senadores o de la Honorable Cámara de Diputados, según disponga el directorio del banco para las distintas denominaciones. Facúltase también al Banco Central de la República Argentina a acuñar moneda con valor numismático o conmemorativo. Dichas monedas no estarán sujetas a las dis-

posiciones contenidas en el primer párrafo de es artículo.

Artículo 32: Toda vez que el banco compruebe violación de su función exclusiva de emitir moneda denominará el hecho ante la autoridad correspondiente y comunicará al Poder Ejecutivo para que éste tome las medidas correspondientes.

Artículo 33: Hasta una tercera parte de las reservas de libre disponibilidad mantenidas con moneda común, podrán estar integradas con títulos públicos valuados a precio de mercado.

El banco podrá mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras operaciones a interés en instituciones bancarias del exterior o en papel de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o en moneda extranjera.

CAPÍTULO IX

Cuentas, estados contables y fiscalización

Artículo 34: El ejercicio financiero del banco durará un (1) año y se cerrará el 31 de diciembre. Los estados contables del banco deberán ser elaborados de acuerdo a normas generalmente aceptadas, siguiendo los mismos principios generales, que se establecieron por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias para el conjunto de entidades.

Artículo 35: El banco publicará a más tardar dentro de la semana siguiente, los estados resumidos de su activo y pasivo al cierre de operación de los días siete (7), quince (15), veintitrés (23), y fin de cada mes.

Artículo 36: La observancia por el Banco Central de la República Argentina de las disposiciones de esta carta orgánica y demás normas aplicables se fiscalizará por un síndico titular y uno adjunto nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Sus actuaciones comprenderán a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

Los síndicos podrán ser abogado, contador público nacional o licenciado en economía. Durarán cuatro (4) años en sus funciones, al término de los cuales podrán ser designados nuevamente.

Los síndicos dictaminarán sobre los balances, cuentas de resultados de fin de ejercicio, para las cuales tendrán acceso a todos los documentos, libros y demás comprobantes de las operaciones del banco. Informarán al directorio, al Poder Ejecutivo y al Honorable Congreso de la Nación sobre la observancia de esta ley y demás normas aplicables. Los síndicos percibirán por sus tareas la remuneración que se fije en el presupuesto del banco.

Artículo 37: No podrán desempeñarse como síndicos:

- a) Quienes se hallen inhabilitados para ser directores;
- b) Los cónyuges, parientes por consanguinidad en línea directa, los colaterales hasta cuarto grado inclusive y las afines dentro del segundo, de las autoridades mencionadas en los artículos 6º, 16 y 44.

CAPÍTULO X

Utilidades

Artículo 38: Las utilidades realizadas y líquidas se afectarán prioritariamente a la capitalización del banco.

Las utilidades que no sean capitalizadas se utilizarán para el fondo de reserva general y para los fondos de reserva especiales hasta que los mismos alcancen el cincuenta (50) por ciento del capital del banco. Una vez alcanzado este límite las utilidades no capitalizadas o aplicadas en los fondos de reserva, deberán ser transferidas libremente a la cuenta del gobierno nacional.

Las pérdidas realizadas por el banco en un ejercicio determinado, se imputarán a las reservas que se hayan constituido en ejercicios precedentes y si ello no fuera posible afectarán al capital de la institución, en cuyo caso el gobierno nacional deberá hacer el aporte correspondiente para restituirlo durante el año fiscal siguiente.

Auditoría externa

Artículo 39: Los estados contables del banco deberán contar con la opinión de auditores externos, designados por el directorio entre aquellos que se encuentren inscriptos en un registro especial, el cual ha de ser creado y reglamentado por el directorio. Las firmas que efectúen las tareas de auditoría no podrán prestar el servicio por más de cuatro (4) períodos consecutivos, no pudiendo reanudar la prestación del mismo hasta que hayan transcurrido por lo menos otros cuatro (4) períodos.

Las informaciones que obtiene la auditoría externa del banco con respecto a las entidades financieras en particular, tienen carácter secreto y no podrán darlas a conocer sin autorización expresa del banco.

El informe de los auditores externos deberá ser elevado por el directorio tanto al Poder Ejecutivo nacional como al Honorable Congreso de la Nación; en el caso de este último, se deberá concretar en ocasión de la remisión del informe anual que dispone el artículo 10, inciso i).

Del ente de control externo

Artículo 40: Las disposiciones de la Ley de Contabilidad sólo son de aplicación al banco en cuanto a la verificación de que las erogaciones encuadren en el presupuesto y a la rendición de cuentas documentadas que, en plazos no superiores a un (1) año, deberá presentar al ente de control externo del sector público.

Artículo 41: Las utilidades del Banco Central de la República Argentina no están sujetas al impuesto a las ganancias. Los bienes y las operaciones del banco reciben el mismo tratamiento impositivo que los bienes y actos del gobierno nacional.

Información económica

Artículo 42: Incumbe al banco compilar y publicar regularmente las estadísticas monetarias y fi-

nancieras. Podrá también hacer lo propio en relación a balances de pagos y las cuentas nacionales de la República Argentina.

El banco podrá realizar, asimismo, investigaciones técnicas sobre temas de interés para la política monetaria, cambiaria y financiera.

CAPÍTULO XI

Superintendencia de entidades financieras y cambiarias

Artículo 43: El Banco Central de la República Argentina ejercerá la supervisión de la actividad financiera y cambiaria por intermedio de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, la que dependerá directamente del presidente de la institución. En todo momento el superintendente deberá tener a disposición del directorio y de las autoridades competentes información sobre la calificación de las entidades financieras y criterios utilizados para dicha calificación.

Artículo 44: La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias es un órgano desconcentrado, presupuestariamente dependiente del Banco Central y sujeto a las auditorías que el mismo disponga. Su administración estará a cargo de un superintendente, un vicesuperintendente y los subgerentes generales de las áreas que la integren.

El vicesuperintendente ejercerá las funciones del superintendente en caso de ausencia, impedimento o vacancia del cargo. Fuera de dichos casos, desempeñará las funciones que el superintendente le asigne o delegue.

Artículo 45: El superintendente y el vicesuperintendente serán designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del presidente del banco de entre los miembros del directorio. La duración en sus funciones será de tres años o hasta la conclusión de su mandato como director, si este último fuera menor.

Artículo 46: Al superintendente le corresponde, en el marco de las políticas generales fijadas por el directorio del banco, y poniendo en conocimiento del mismo las decisiones que se adopten, las siguientes funciones:

- a) Calificar a las entidades financieras a los fines de la Ley de Entidades Financieras;
- b) Cancelar la autorización para operar en cambios;
- c) Aprobar los planes de regularización y/o saneamiento de las entidades financieras;
- d) Implementar y aplicar las normas reglamentarias de la Ley de Entidades Financieras, dictadas por el directorio del banco;
- e) Establecer los requisitos que deben cumplir los auditores de las entidades financieras y cambiarias.

Artículo 47: Son facultades propias del superintendente:

- a) Establecer el régimen informativo y contable para las entidades financieras y cambiarias;

- b) Disponer la publicación de los balances mensuales de las entidades financieras, estados de deudores y demás informaciones que sirven para el análisis de la situación del sistema;
- c) Ordenar a las entidades que cesen o dejasen de llevar a cabo políticas de préstamos o de asistencia financiera que pongan en peligro la solvencia de las mismas;
- d) Dictar normas para la obtención, por parte de las entidades financieras, de recursos en moneda extranjera y a través de la emisión de bonos, obligaciones y otros títulos, tanto en el mercado local como en los externos;
- e) Declarar la extensión en la aplicación de la Ley de Entidades Financieras a personas no comprendidas en ella, cuando así lo aconsejen el volumen de sus operaciones y razones de política monetaria, cambiaria o crediticia, previa consulta con el presidente del banco;
- f) Aplicar las sanciones que establece la Ley de Entidades Financieras, por infracciones cometidas por las personas o entidades, o ambas a la vez, a las disposiciones de la misma;
- g) Ejercer las demás facultades que las leyes otorgan al banco relativas a la superintendencia, con excepción de las expresamente atribuidas por esta ley al directorio del banco;
- h) Aplicar las disposiciones legales que sobre el funcionamiento de las denominadas tarjetas de crédito, tarjetas de compra, dinero electrónico u otras similares dicte el Honorable Congreso de la Nación y las reglamentaciones que en uso de sus facultades dicte el Banco Central de la República Argentina.

Artículo 48: En su carácter de administrador, son también atribuciones del superintendente:

- a) Establecer las normas para la organización y gestión de la superintendencia, y
- b) Nombrar, promover y separar al personal de la superintendencia, de acuerdo con las normas que se dicten a dichos efectos y disponer la sustanciación de sumario.

Artículo 49: El superintendente podrá, previa autorización del presidente del banco, disponer la suspensión transitoria, total o parcial, de las operaciones de una o de varias entidades financieras, por un plazo máximo de treinta (30) días. De esta medida se deberá dar posterior cuenta al directorio.

Durante este período serán nulos los compromisos que aumenten los pasivos de las entidades y se suspenderá la exigibilidad y devengamiento de sus intereses. La suspensión transitoria de operaciones, en ningún caso dará derecho a los acreedores al reclamo por daños y perjuicios contra el banco o el Estado nacional.

Por intermedio del presidente del banco, el superintendente podrá solicitar al directorio se revoque

la autorización para operar de una entidad financiera. En tal caso el directorio deberá evaluar solicitud en un plazo máximo de quince (15) días corridos a partir del momento de la solicitud. El plazo será prorrogable por una única vez, por o quince (15) días corridos.

Artículo 50: La superintendencia podrá requerir de las empresas y personas comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, la exhibición de sus libros y documentos, pudiendo disponer el secuestro de la documentación y demás elementos relacionados con transgresiones a dichas normas.

Artículo 51: La superintendencia podrá requerir de las entidades financieras, casas y agencias, oficinas y corredores de cambio, exportadores e importadores u otras personas físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en operaciones de cambio, la exhibición de sus libros y documentos suministrados de todas las informaciones y documentación relacionadas con las operaciones que hubieran realizado o en las que hubieran intervenido y poner el secuestro de los mismos y todo otro elemento relacionado con dichas operaciones.

Artículo 52: La superintendencia se encuentra facultada para formular los cargos ante los fueros correspondientes por infracciones a las normas cambiarias y financieras y para solicitar embargos preventivos y demás medidas precautorias por importes que se estimen suficientes para garantizar las multas y reintegros que sean impuestos por competente.

Artículo 53: Las informaciones que obtiene la superintendencia en el ejercicio de sus facultades de inspección tienen carácter secreto. Los funcionarios y empleados intervinientes no deben darlas a conocer sin autorización expresa de la superintendencia, aun después de haber dejado de pertenecer a la misma.

Artículo 54: La superintendencia podrá requerir el auxilio de la fuerza pública si encuentra resistencia o resistencia en el cumplimiento de las funciones de inspección a su cargo. Deberá además requerir, sin demora, de los tribunales competentes las órdenes de allanamiento que sean necesarias.

CAPÍTULO XII

Jurisdicción

Artículo 55: El Banco Central de la República Argentina está sometido exclusivamente a la jurisdicción federal. Cuando sea actor en juicio, la competencia nacional será concurrente con la de la justicia ordinaria de las provincias. El banco podrá, asimismo, prorrogar jurisdicción a favor de tribunales extranjeros.

Artículo 56: El presidente del banco y el superintendente podrán absolver posiciones en juicio escrito, no estando obligados a hacerlo personalmente.

CAPÍTULO XIII

Disposiciones transitorias

Artículo 57: Las operaciones crediticias en curso al momento de promulgarse la presente ley...

estar detalladas en un balance inicial y, durante los plazos que se establezcan para su recuperación final, no estarán sujetas a las restricciones generales que sobre este tipo de operación se fijan en la presente ley.

Artículo 58: El primer directorio que sea designado de acuerdo con lo prescrito por esta ley, con la excepción del presidente y vicepresidente, dispondrá a través de un sorteo que la mitad de sus integrantes permanezcan en funciones sólo por medio período. Una vez alcanzado el mismo, quienes los reemplacen serán designados por un mandato completo de seis (6) años, mediante el procedimiento establecido en el artículo 7º.

Artículo 59: Los miembros del directorio y de la sindicatura que se hallen en funciones al promulgarse la presente ley, continuarán ejerciéndolas hasta que sean confirmados en sus cargos por el procedimiento establecido en el artículo 7º o se proceda a su reemplazo.

Artículo 60: Fíjase en un veinte (20) por ciento el límite de las reservas de libre disponibilidad mantenidas como prenda común que podrán estar integradas con títulos públicos valuados a precio de mercado, durante la gestión del primer directorio del banco designado de acuerdo con lo prescrito por esta ley.

Sólo por necesidad de dotar de adecuada liquidez al sistema financiero o por verse afectados los precios de mercado de los activos mantenidos como prenda común, la participación de títulos públicos mencionada en el párrafo anterior podrá llegar, transitoriamente, y hasta el límite establecido en el artículo 33. Tal circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del Honorable Congreso de la Nación y no podrá extenderse por plazos superiores a los noventa (90) días corridos.

Art. 2º — Incorpórase el siguiente como artículo 34 de la ley 21.526 de Entidades Financieras:

Artículo 34: La entidad que no cumpla con las disposiciones de este título o con las respectivas normas dictadas por el Banco Central de la República Argentina, deberá dar las explicaciones pertinentes, dentro de los plazos que éste establezca.

La entidad deberá presentar un plan de regularización y saneamiento, en los plazos y condiciones que establezca el Banco Central de la República Argentina y que en ningún caso podrá exceder de los treinta (30) días, cuando:

- a) Se encontrara afectada su solvencia o liquidez, a juicio del Banco Central de la República Argentina;
- b) Se registraran deficiencias de efectivo mínimo durante los períodos que el Banco Central de la República Argentina establezca;
- c) Registrara reiterados incumplimientos a los distintos límites o relaciones técnicas establecidas;
- d) No mantuviere la responsabilidad patrimonial mínima exigida para su clase, ubicación o características determinadas.

El Banco Central de la República Argentina podrá sin perjuicio de ello designar veedores con facultad de veto cuyas resoluciones serán recurribles, en única instancia, ante el presidente del Banco Central de la República Argentina.

Asimismo, podrá exigir la constitución de garantías y limitar o prohibir la distribución o remesas de utilidades.

La falta de presentación, el rechazo o el incumplimiento de los planes de regularización y saneamiento facultará al Banco Central de la República Argentina para resolver, habiendo sido oída o emplazada la entidad y sin más trámite, la revocación de la autorización para funcionar como entidad financiera, sin perjuicio de aplicar las sanciones previstas en la presente.

El Banco Central de la República Argentina, a fin de facilitar el cumplimiento de los planes de regularización y saneamiento o fusiones y/o absorciones, podrá: admitir con carácter temporario excepciones a los límites y relaciones técnicas pertinentes; eximir o diferir el pago de los cargos y/o multas previstos en la presente ley. Esto, sin perjuicio de otras medidas que, sin afectar las restricciones que el cumplimiento de su Carta Orgánica le impone, propendan al cumplimiento de los fines señalados. Sobre estas decisiones el Presidente del Banco Central deberá informar al Honorable Congreso de la Nación en oportunidad del informe anual dispuesto en el artículo 10.

Art. 3º — Modifícanse el artículo 28, inciso a), y los títulos V, VI y VII de la ley 21.526 de Entidades Financieras y sus modificatorias, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

Artículo 28: (. . .)

- a) Explotar por cuenta propia empresas comerciales, industriales, agropecuarias o de otra clase, salvo con expresa autorización del Banco Central, quien la deberá otorgar con carácter general y estableciendo en la misma límites y condiciones que garanticen la no afectación de la solvencia y patrimonio de la entidad. Cuando ello ocurriera, la superintendencia deberá adoptar los recaudos necesarios para un particular control de estas actividades.

TITULO V

Secreto

Artículo 39: Las entidades comprendidas en esta ley no podrán revelar las operaciones pasivas que realicen.

Sólo se exceptúan de tal deber los informes que requieran:

- a) Los jueces en causas judiciales, con los recaudos establecidos por las leyes respectivas;
- b) El Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus funciones;

c) Los organismos recaudadores de impuestos nacionales, provinciales o municipales, sobre la base de las siguientes condiciones:

- Debe referirse a un responsable determinado;
- Debe encontrarse en curso una verificación impositiva con respecto a ese responsable, y
- Debe haber sido requerido formal y previamente.

Respecto de los requerimientos de información que formule la Dirección General Impositiva, no serán de aplicación las dos primeras condiciones de este inciso;

d) Las propias entidades para casos especiales, previa autorización expresa del Banco Central de la República Argentina.

El personal de las entidades deberá guardar absoluta reserva de las informaciones que lleguen a su conocimiento.

Artículo 40: Las informaciones que el Banco Central de la República Argentina reciba o recoja en ejercicio de sus funciones, vinculadas a operaciones pasivas, tendrán carácter estrictamente confidencial.

El personal del Banco Central de la República Argentina, o de auditorías externas que éste contrate para cumplir sus funciones, deberá guardar absoluta reserva sobre las informaciones que lleguen a su conocimiento. Los profesionales intervinientes en dichas auditorías externas quedarán sujetos a las disposiciones de los artículos 41 y 42 de la presente ley.

Las informaciones que publique o exija hacer públicas el Banco Central de la República Argentina, sobre las entidades comprendidas en esta ley, mostrarán los diferentes rubros que, para las operaciones pasivas, como máximo podrán contener la discriminación del balance general y cuenta de resultados mencionados en el artículo 36.

TITULO VI

Sanciones y recursos

Artículo 41: Quedarán sujetas a sanción por el Banco Central de la República Argentina las infracciones a la presente ley, sus normas reglamentarias y resoluciones que dicte el Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus facultades.

Las sanciones serán aplicadas por el presidente del Banco Central de la República Argentina, o la autoridad competente, a las personas o entidades o ambas a la vez, que sean responsables de las infracciones enunciadas precedentemente, previo sumario que se instruirá con audiencia de los imputados, con sujeción a las normas de procedimientos que establezca la indicada institución y podrá consistir, en forma aislada o acumulativa, en:

1. Llamado de atención.
2. Apercibimiento.
3. Multas.

4. Inhabilitación temporaria o permanente para el uso de la cuenta corriente bancaria
5. Inhabilitación temporaria o permanente para desempeñarse como promotores, fundadores, directores, administradores miembros de los consejos de vigilancia, síndico, liquidadores o gerentes de las entidades comprendidas en la presente ley.
6. Revocación de la autorización para funcionar.

El Banco Central de la República Argentina reglamentará la aplicación de las multas, teniendo en cuenta para su fijación los siguientes factores:

- Magnitud de la infracción.
- Perjuicio ocasionado a terceros.
- Beneficio generado para el infractor.
- Volumen operativo del infractor.
- Responsabilidad patrimonial de la entidad

Si del sumario se desprendiere la comisión de delitos, el Banco Central de la República Argentina promoverá las acciones penales que correspondieran, en cuyo caso podrá asumir la calidad de parte querellante en forma promiscua con el ministerio fiscal.

Artículo 42: Las sanciones establecidas en los incisos 1) y 2) del artículo anterior, sólo serán recurribles por revocatoria ante el presidente del Banco Central de la República Argentina.

Aquellas sanciones a las que se refieren los incisos 3), 4), 5) y 6) del artículo anterior, serán apelables al solo efecto devolutivo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.

En el caso del inciso 6), hasta tanto se resuelva el recurso, dicha cámara dispondrá la intervención judicial de la entidad sustituyendo a los representantes legales en sus derechos y facultades.

Los recursos deberán interponerse y fundarse ante el Banco Central de la República Argentina dentro de los quince (15) días hábiles a contar desde la fecha de notificación de la resolución. Si el recurso fuera de apelación, las actuaciones deberán elevarse a la cámara dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.

Para el cobro de las multas aplicadas en virtud del inciso 3) del artículo anterior, el Banco Central de la República Argentina seguirá al procedimiento de ejecución fiscal previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Constituirá título suficiente la copia simple de la resolución que aplicó la multa, suscrita por dos firmas autorizadas del Banco Central de la República Argentina, sin que puedan oponerse otras excepciones que la de prescripción expresa y pago documentados.

La prescripción de la acción que nace de las infracciones a que se refiere este artículo, se computará los seis (6) años de la comisión del hecho que lo configure. Ese plazo se interrumpe por la comisión de otra infracción y por los actos y diligencias de procedimientos inherentes a la sustanciación de una vez abierto por resolución del

Banco Central de la República Argentina. La prescripción de la multa se operará a los tres (3) años contados a partir de la fecha de la notificación de dicha sanción firme.

TITULO VII

CAPÍTULO I

Revocación de la autorización para funcionar, disolución y liquidación de las entidades financieras

Artículo 43: Cualquiera sea la causa de la disolución de una entidad comprendida en la presente ley, las autoridades legales o estatutarias deberán comunicarlo al Banco Central de la República Argentina, en un plazo no mayor a los dos (2) días hábiles de tomado conocimiento de la misma. Igual procedimiento deberá observarse en el caso de decisión de cambio del objeto social.

Artículo 44: El Banco Central de la República Argentina podrá resolver la revocación de la autorización para funcionar de las entidades financieras:

- a) A pedido de las autoridades legales o estatutarias de la entidad;
- b) En los casos de disolución previstos en el Código de Comercio o en las leyes que rijan su existencia como persona jurídica;
- c) Por afectación de la solvencia y/o liquidez de la entidad que, a juicio del Banco Central de la República Argentina, no pudiera resolverse por medio de un plan de regularización y saneamiento;
- d) En los demás casos previstos en la presente ley

Artículo 45: El Banco Central de la República Argentina deberá notificar de inmediato a las autoridades de la ex entidad la resolución adoptada.

La resolución de la revocación de la autorización para funcionar que adopte el Banco Central de la República Argentina, se deberá comunicar de inmediato al juzgado comercial competente, el que, a partir de ese momento, tomará intervención en el proceso de cese de la actividad reglada por la presente ley y/o de la liquidación de la ex entidad, las que deberán ser practicadas del modo en que dicho juez lo disponga.

Si las autoridades legales o estatutarias de la ex entidad lo solicitaren al juez y éste considerare que existen garantías suficientes previa opinión del Banco Central de la República Argentina, podrá autorizarlas a que ellas mismas administren el proceso de su cese de la actividad reglada por la presente ley y/o de la liquidación de la ex entidad. En cualquier estado del proceso de autoliquidación de la actividad o de la persona jurídica, el juez podrá disponer la continuación de los mismos por la vía judicial.

Si la resolución del Banco Central de la República Argentina que dispone la revocación de la autorización para funcionar, comprendiere la decisión de peticionar la quiebra de la ex entidad, dicho pedido deberá formalizarse perentoriamente ante el juez

interviniente, quien deberá pronunciarse al respecto. No obstante ello, el juez podrá decretar la quiebra en cualquier estado del proceso, cuando estime que se han configurado los presupuestos necesarios.

Los honorarios de los peritos y/o auxiliares que el juez interviniente pudiere designar a los fines del presente artículo, deberán fijarse en función de la efectiva tarea fijada por aquéllos, con absoluta independencia de la cuantía de los activos, pasivos y/o patrimonio de la entidad.

Artículo 46: La autoliquidación, la liquidación judicial y/o la quiebra de las entidades financieras quedarán sometidas, en todo lo no establecido por la presente ley, a lo prescrito por las leyes 19.550 y 19.551.

En dichos procesos, el Banco Central de la República Argentina tendrá además de la actuación que le correspondiere en su carácter de acreedor, con la plenitud de sus alcances, aquella que resulta de la aplicación de su condición de autoridad de superintendencia bancaria.

Artículo 47: La resolución que disponga la revocación de la autorización para funcionar será apelable, al solo efecto devolutivo, por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. El recurso deberá interponerse y fundarse ante el Banco Central de la República Argentina dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.

CAPÍTULO II

Liquidación judicial

Artículo 48: El liquidador judicial deberá ser designado por el juez competente, conforme al artículo 277 de la ley 19.551.

Desde la resolución de revocación de la autorización para funcionar y hasta tanto el juez competente resuelva el modo de la liquidación de la actividad y/o de la ex entidad, serán nulos cualquier tipo de compromisos que aumenten los pasivos de las ex entidades y cesará la exigibilidad y devengamiento de sus intereses.

El liquidador judicial podrá solicitar orden de allanamiento y el auxilio de la fuerza pública para asegurar el cumplimiento de la decisión del juez.

Los honorarios del liquidador judicial se fijarán también en función de la efectiva tarea realizada, con absoluta independencia de la cuantía de los activos, pasivos y/o patrimonio de la entidad.

Artículo 49: La liquidación judicial se realizará de acuerdo a las siguientes disposiciones y con aplicación de las normas sobre liquidación de sociedades, en lo que no queda expresamente contemplado a continuación:

- a) Desde la resolución de revocación de la autorización para funcionar, ningún acreedor por causa o título anterior a la revocación podrá iniciar o proseguir actos de ejecución forzada sobre los bienes de la ex entidad, salvo que tuvieren por objeto el cobro de un

crédito hipotecario, prendario o derivado de una relación laboral.

Los embargos y/o inhibiciones generales trabados, no podrán impedir la realización de los bienes de la ex entidad y deberán recaer sobre el producido de su realización, por hasta los montos originalmente constituidos;

- b) Los pagos a los acreedores deberán efectuarse con la previa conformidad del juez interviniente;
- c) El liquidador judicial determinará la totalidad de obligaciones, exigibles provenientes de depósitos de sumas de dinero, estableciendo la procedencia del pago y genuinidad de los instrumentos;
- d) Sobre los fondos que la entidad liquidada tuviese depositados en concepto de encaje por efectivo mínimo en moneda local, los depositantes en dicha moneda tendrán un privilegio especial, exclusivo y excluyente, para la satisfacción de su crédito conforme a la siguiente prelación:
 - Hasta la suma de tres mil pesos (\$ 3.000) por persona, gozando de este privilegio especial una sola persona por depósito.
 - Sobre el remanente, la totalidad de los depósitos constituidos por persona, con una antelación mayor a los 180 días de la fecha de revocación de la autorización para funcionar.
 - Sobre el resto, todos los demás depósitos a prorrata;
- e) Satisfecho el crédito del Banco Central de la República Argentina, según lo dispuesto en el artículo 53, los depositantes, cualquiera sea la moneda en la que constituyeron sus depósitos, tendrán privilegio general para el cobro de sus acreencias;
- f) El liquidador judicial realizará informes mensuales sobre el estado de la liquidación, los que permanecerán a disposición de los interesados en el juzgado interviniente en la liquidación;
- g) Concluidas las operaciones de liquidación judicial, el liquidador presentará al juez interviniente el balance final con una memoria explicativa de sus resultados y con un proyecto de distribución de fondos, previa deducción de los importes necesarios para cancelar las deudas que no hubieren podido ser satisfechas.

De la presentación se dará cuenta por edictos publicados por tres (3) días, en dos (2) diarios del lugar en que la ex entidad haya tenido su sede social, uno de los cuales será el de anuncios legales.

Los socios y acreedores reconocidos sólo podrán formular impugnaciones al balance final de la liquidación y al proyecto de distribución de fondos dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al de la última publi-

cación y ellas serán resueltas por el juez en el expediente de la liquidación, donde los impugnantes tendrán derecho a intervenir en calidad de parte. La sentencia que se dicte tendrá efecto aun con respecto a quienes no hubieran formulado impugnaciones. Transcurrido el plazo de treinta (30) días hábiles sin que se hubieran producido impugnaciones, o resueltas éstas judicialmente, tanto el balance como el proyecto de distribución se tendrán por aprobados con las modificaciones que puedan resultar de la sentencia y se procederá a la distribución;

- h) Las sumas de dinero no reclamadas por sus titulares serán depositadas en el juzgado interviniente por el plazo de un (1) año, a contar de la publicación de la declaración judicial de finalización de la liquidación. Dichos fondos podrán ser invertidos a propuesta del liquidador judicial.

El derecho de los acreedores a percibir los importes que les correspondiere en la distribución prescribirá en el plazo indicado. La prescripción operará de pleno derecho, destinándose los importes no cobrados al Instituto Nacional de Previsión Social para Jubilados y Pensionados;

- i) Distribuidos los fondos o, en su caso, efectuada la entrega indicada precedentemente el juez, mediante resolución que será publicada por un (1) día en dos (2) diarios de lugar en que la entidad haya tenido su sede social, uno de los cuales será el de anuncios legales, declarará finalizada la liquidación.

Los acreedores de la ex entidad sólo podrán accionar contra ella en tanto no hay sido pronunciada la declaración de finalización de la liquidación y únicamente hasta la concurrencia de los bienes no realizados fondos no distribuidos o importes no depositados, sin perjuicio de las acciones que le correspondiere contra los socios en forma individual;

- j) Los libros y documentación de la entidad liquidada serán depositados en el lugar que el juez designe, por el plazo de diez (10) años a contar de la fecha de publicación de declaración judicial de finalización de la liquidación, a cuyo vencimiento serán destruidos.

CAPÍTULO III

Quiebras

Artículo 50: Las entidades financieras no podrán solicitar la formación de concurso preventivo ni su propia quiebra, ni ser declaradas en quiebra a pedido de terceros. Ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 52 de la presente ley.

En el supuesto de autoliquidación, no será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

Cuando la quiebra sea pedida por circunstancias que la harían procedente según la legislación común, los jueces rechazarán de oficio el pedido y darán intervención al Banco Central de la República Argentina.

Argentina para que, si así correspondiere, se formalice la petición de quiebra.

Estando la ex entidad en proceso de liquidación judicial, el puez podrá declarar su quiebra cuando lo estimare oportuno, si se dieran los presupuestos necesarios para ello.

Artículo 51: Una vez que el juez interviniente declare la quiebra, ésta quedará sometida a las prescripciones de la ley 19.551 salvo en lo concerniente a las siguientes disposiciones:

- a) No serán reputados ineficaces ni susceptibles de revocación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 122 a 125 de dicha ley, los actos realizados por el Banco Central de la República Argentina por los supuestos previstos en la ley vigente hasta el momento;
- b) En ningún caso serán aplicables los artículos 182, 183 y 184 de la ley 19.551.

Artículo 52: Transcurridos ciento cincuenta (150) días hábiles desde la fecha de iniciación de la liquidación judicial, cualquier acreedor podrá solicitar la declaración de quiebra de la ex entidad.

Artículo 53: Los fondos asignados y créditos otorgados por causa de redescuentos, adelantos, pagos efectuados en virtud de convenios de créditos recíprocos o por cualquier otro concepto, le serán satisfechos al Banco Central de la República Argentina con privilegio absoluto por sobre todos los demás créditos, con las siguientes excepciones:

- a) Los créditos con privilegio especial por causa de hipoteca o prenda;
- b) Los créditos privilegiados emergentes de las relaciones laborales, comprendidos en el artículo 268 de la ley 21.297 (t.o. 1976). Tendrán el mismo privilegio los intereses que se devenguen por las acreencias precedentemente expuestas, hasta la cancelación total;
- c) Los créditos provenientes de los depósitos en moneda local, realizados por hasta los montos y condiciones indicados en los dos primeros apartados del inciso d) del artículo 49, y que no hubieran sido satisfechos por el procedimiento establecido en dicho inciso.

CAPÍTULO IV

Disposiciones comunes

Artículo 54: A los efectos del artículo 793 del Código de Comercio, las certificaciones de los saldos deudores en cuenta corriente serán suscritas por los funcionarios que actúen en la administración del proceso de autoliquidación, el liquidador judicial o el síndico de la quiebra de las ex entidades de que se trate.

Artículo 55: El Banco Central de la República Argentina, tendrá capacidad legal para promover las acciones civiles y penales que correspondan contra las personas responsables de actos previstos en el Código Penal. En las acciones penales, podrán asumir la calidad de parte querellante.

También podrá asumir esa calidad, en las causas penales que se instruyan por quiebra fraudulenta o culpable de acuerdo con las respectivas normas del Código Penal.

Art. 4º — Facúltase al Banco Central de la República Argentina para establecer los términos y condiciones bajo las cuales las entidades financieras podrán utilizar sistemas de reproducción en fotografías, microfilmaciones o cualquier otro método de reproducción electrónica de documentos que merezcan ser conservados, en atención a su valor legal, fiscal, informativo, administrativo o histórico, los que serán considerados copias auténticas con valor probatorio, siempre y cuando sean certificados por funcionarios con responsabilidad en la custodia de los mismos.

Deberá figurar impreso en el cuerpo de los cheques el número de clave única de identificación tributaria (CUIT), o en su defecto el número del documento de identidad del titular de la cuenta corriente, de acuerdo a las disposiciones que el Banco Central establezca al respecto.

Las entidades financieras deberán reintegrar los cheques pagados al librador en los plazos y condiciones que establezca el Banco Central de la República Argentina en su reglamentación.

En general, toda documentación cuya reproducción se admita según lo establecido precedentemente, previo a su destrucción física deberá ser puesto a disposición de los interesados en los plazos y condiciones que establezca el Banco Central de la República Argentina.

Art. 5º — Modifícanse los siguientes artículos de la ley 19.359, texto ordenado en 1982:

Artículo 8º: Reemplázase el texto del primer párrafo por el siguiente:

El Banco Central de la República Argentina tendrá a su cargo el proceso sumario, el que hasta la conclusión de la causa para definitiva no podrá exceder del plazo de trescientos sesenta (360) días hábiles, a contar desde la fecha de resolución de apertura del sumario.

Reemplázase el texto del tercer párrafo, por el siguiente:

La sustanciación del proceso estará a cargo de una dependencia jurídica del banco, la cual recibirá la causa a prueba, producirá la que considere oportuna para mejor proveer, dictará las resoluciones que sean necesarias hasta la conclusión de la causa para definitiva y elevará las actuaciones al presidente del banco para remitirlas al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico de la Capital Federal o al Federal con asiento en la provincia, según corresponda.

Reemplázase el texto del cuarto párrafo, inciso d), por el siguiente:

El Banco Central de la República Argentina deberá remitir las actuaciones al juzgado correspondiente, dentro de los quince (15) días de vencido el plazo dispuesto en el inciso anterior.

Elimínase la primera parte del texto del cuarto párrafo, inciso e).

Artículo 9º: Reemplázase el texto de este artículo, por el siguiente:

El juzgado nacional de primera instancia que resulte competente resolverá sobre las impugnaciones efectuadas, sin otra sustanciación, salvo las medidas que estime útiles para mejor proveer. También podrá practicar las pruebas que hayan sido denegadas por la jurisdicción administrativa, cuando el impugnante hubiese insistido en ellas al interponer el recurso y el juzgado decidiese su procedencia. Estas pruebas se producirán dentro del plazo de veinte (20) días. La sentencia deberá dictarse dentro del término de los cincuenta (50) días siguientes.

Las resoluciones definitivas dictadas por el juzgado interviniente, serán recurribles con efecto suspensivo ante la respectiva cámara del fuero, dentro de los diez (10) días de su notificación.

El recurso de su apelación deberá interponerse y fundarse ante el juzgado interviniente, el cual lo elevará a la cámara, juntamente con el sumario, en el término de diez (10) días.

Artículo 14: Reemplázase el texto de este artículo, por el siguiente:

La ejecución de pena de multa impuesta en los supuestos previstos en la presente ley, estará a cargo del Banco Central de la República Argentina y tramitará conforme al régimen previsto por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para las ejecuciones fiscales. Constituirá título suficiente la copia simple de la resolución condenatoria certificada por el secretario del tribunal, suscrita por dos firmas autorizadas del Banco Central de la República Argentina.

Art. 6º — Dentro del plazo de ciento ochenta (180) días corridos de la vigencia de la presente ley, todos los sumarios de la naturaleza aludida en el artículo 5º, que tramitan por ante el Banco Central de la República Argentina deberán ser concluidos, elevando la causa para definitiva al Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Económico de la Capital Federal, o al Federal con asiento en la provincia, según corresponda.

Art. 7º — La mención del Banco Central de la República Argentina hecha en las leyes mencionadas en la presente, debe entenderse referida al Banco Central de la República Argentina y/o la Superintendencia de Entidades Comerciales y Cambiarias, según corresponda.

Art. 8º — Las restricciones fijadas por la presente ley no son de aplicación en lo que se refiere a las actividades del Banco Central de la República Argentina, como síndico liquidador de las ex entidades existentes al momento de entrar en vigencia la presente ley, las que continuarán liquidándose conforme a las normas vigentes hasta el momento.

Art. 9º — Deróganse a partir de la vigencia de esta carta orgánica la ley 21.572 (creación de la cuenta de regulación monetaria) y el decreto 4.511/58 (fiscalización del régimen cambiario por el Banco Central), ratificado por la ley 14.467.

Art. 10. — Derógase el artículo 18 de la ley 21.526 de entidades financieras.

Art. 11. — Derógase el artículo 7º de la ley 22.267.

Art. 12. — Derógase la ley 22.529 de consolidación y redimensionamiento del sistema financiero.

Art. 13. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

ALBERTO R. PIERRI.

*Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.*

ANTECEDENTE

Sanción de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación

(6 de noviembre de 1991)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

REGIMEN GENERAL

CAPÍTULO I

Naturaleza y objeto

Artículo 1º — El Banco Central de la República Argentina es una entidad autárquica del Estado Federal, regida por las disposiciones de la presente ley y demás normas legales concordantes.

Art. 2º — El Banco Central de la República Argentina tendrá su domicilio en la Capital de la República. Podrá establecer agencias y nombrar corresponsales en el país y en el exterior.

Art. 3º — Es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda.

El Banco deberá desarrollar una política monetaria y financiera dirigida a salvaguardar las funciones del dinero como reserva de valor e instrumento de pago para cancelar obligaciones monetarias, en un todo de acuerdo con la legislación que dicte el Honorable Congreso de la Nación.

En la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera del Banco Central no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones de otros órganos del Estado Federal.

El Banco Central no podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionar, restringir o delegar sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación, el ejercicio de sus facultades legales.

El Estado Federal garantiza las obligaciones asumidas por el Banco.

Art. 4º — Son, además, otras funciones del Banco Central de la República Argentina:

- Regular la cantidad de dinero y observar la evolución del crédito en la economía;
- Vigilar el buen funcionamiento del mercado financiero y aplicar la ley de entidades financieras y demás normas que, en su consecuencia, se dicten;
- Actuar como agente financiero del Estado Federal, asesor económico, financiero, monetario y cambiario del Poder Ejecutivo nacional, y depositario y agente del país ante las instituciones mo-

netarias, bancarias y financieras internacionales a las cuales la Nación haya adherido;

- d) Concentrar y administrar, en su carácter de agente financiero del Estado Federal, sus reservas de oro, divisas y otros activos externos; y,
- e) Propender al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales.

CAPÍTULO II

Capital

Art. 5º — El capital del Banco quedará establecido en el balance inicial que se presentará al momento de promulgarse la presente ley. Al final de cada ejercicio anual el Directorio procederá a su ajuste, capitalizando las ganancias líquidas y realizadas, si las hubiere.

CAPÍTULO III

Directorio

Art. 6º — El Banco estará gobernado por un Directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente y ocho directores. Todos ellos deberán ser argentinos nativos o por naturalización, con no menos de diez (10) años de ejercicio de la ciudadanía. Deberán tener probada idoneidad en materia monetaria, bancaria o legal vinculada al área financiera y gozar de reconocida solvencia moral.

Art. 7º — El presidente, el vicepresidente y los directores serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado de la Nación durarán seis (6) años en sus funciones, pudiendo ser designados nuevamente. Dicho período será contado a partir de la sanción de la presente ley.

Las retribuciones del presidente, el vicepresidente y los directores serán las que fije el presupuesto del banco.

Art. 8º — No podrán desempeñarse como miembros del directorio:

- a) Los empleados o funcionarios de cualquier repartición del gobierno nacional y los que tuvieren otros cargos o puestos retribuidos o remunerados en cualquier forma, que dependiesen directa o indirectamente de los gobiernos nacional, provinciales o municipales, incluidos sus poderes legislativos y judiciales. No se encuentran comprendidos en las disposiciones de este inciso quienes ejercen la docencia.
- b) Los accionistas, o los que formen parte de la dirección, administración, sindicatura o presten servicios a las entidades financieras al momento de su designación;
- c) Los que se encuentren alcanzados por las inhabilidades establecidas en la Ley de Entidades Financieras.

Art. 9º — Los integrantes del directorio podrán ser removidos de sus cargos, por el Poder Ejecutivo nacional, por incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Carta Orgánica o por incurrir en alguna de las inhabilidades previstas en el artículo anterior.

La remoción de los miembros del directorio será decretada por el Poder Ejecutivo nacional cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, debiéndose contar para ello con el

previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación. La misma será presidida por el presidente de la Cámara de Senadores e integrada por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía de la misma y por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación.

Atribuciones del presidente

Art. 10. — El presidente es la primera autoridad ejecutiva del banco y, en tal carácter:

- a) Ejerce la administración del banco;
- b) Actúa en representación del directorio y convoca y preside sus reuniones;
- c) Vela por el fiel cumplimiento de esta carta orgánica y demás leyes nacionales y de las resoluciones del directorio;
- d) Ejerce la representación legal del banco en sus relaciones con terceros.
- e) Propone al Poder Ejecutivo nacional la designación del superintendente de entidades financieras y cambiarias;
- f) Participa con carácter consultivo en las reuniones convocadas por el Poder Ejecutivo nacional para discutir temas vinculados a asuntos de importancia para la política monetaria, cambiaria y financiera;
- g) Nombra, promueve y separa al personal del banco de acuerdo con las normas que dicte el directorio, dándole posterior cuenta de las resoluciones adoptadas;
- h) Dispone la sustanciación de sumarios al personal cualquiera sea su jerarquía, por intermedio de la dependencia competente;
- i) Deberá presentar un informe anual sobre las operaciones del banco al Honorable Congreso de la Nación. A su vez deberá comparecer ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, de Economía del Senado de la Nación y de Finanzas de la Cámara de Diputados, en sesiones públicas y conjuntas de las mismas, por cada una de las Cámaras, al menos una vez durante el período ordinario, a los efectos de informar sobre los alcances de las políticas monetarias, cambiarias y financiera en ejecución.

Art. 11. — Cuando razones de urgencia fundadas así lo exijan, el presidente podrá, asimismo, resolver asuntos reservados al directorio, en consulta con el vicepresidente o quien haga sus veces y por lo menos un director, debiendo dar cuenta a ese cuerpo, en la primera oportunidad que el mismo se reúna, de las resoluciones adoptadas en esta forma. De la misma facultad gozará quien lo reemplace.

Art. 12. — El presidente convocará a las reuniones del directorio por lo menos una vez cada quince (15) días. Cinco (5) miembros formarán quórum y, salvo disposición en contrario, las resoluciones serán adoptadas por simple mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate el presidente tendrá doble voto. Por vía de reglamentación podrá el directorio establecer el requisito de mayorías más estrictas en asuntos de singular importancia.

El ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos del Poder Ejecutivo nacional, o su representante, puede participar con voz pero sin voto en las sesiones del directorio.

Art. 13. — El vicepresidente ejercerá las funciones del presidente en el caso de ausencia o impedimento o vacancia del cargo. Fuera de dichos casos, desempeñará las que el presidente —de entre las propias— le asigne o delegue.

El directorio nombrará un vicepresidente 2º entre sus miembros, quien sustituirá al vicepresidente en caso de ausencia temporaria o cuando ejerza la presidencia.

Si el presidente, el vicepresidente o alguno de los directores falleciere, renunciare o de alguna otra forma dejare vacante su cargo antes de terminar el período para el cual fue designado, se procederá a nombrar a su reemplazante, para completar el período, en la forma establecida en el artículo 7º

Atribuciones del directorio

Art. 14. — El directorio determina la ejecución de la política monetaria y financiera del banco, atendiendo a lo establecido en el artículo 3º. Corresponde asimismo al directorio:

- a) Intervenir en las decisiones que afecten al mercado monetario y cambiario, estando facultado para operar en ambos mercados;
- b) Prescribir requisitos de encaje, sujeto a las condiciones establecidas en el artículo 28;
- c) Fijar las tasas de interés y demás condiciones generales de las operaciones crediticias del Banco;
- d) Establecer relaciones técnicas de liquidez y solvencia para las entidades financieras;
- e) Efectuar el ajuste del capital del banco, de acuerdo a lo establecido por el artículo 5º;
- f) Determinar las sumas que corresponde destinar a reservas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38;
- g) Fijar políticas generales que hacen al ordenamiento económico y a la expansión del sistema financiero, las que deberán ser observadas por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias;
- h) Revocar la autorización para operar de las entidades financieras y cambiarias y/o disponer su liquidación, por sí, o a pedido del superintendente;
- i) Ejercer las facultades y poderes que asignan al banco esta ley y sus normas concordantes;
- j) Reglamentar la creación y funcionamiento de cámaras compensadoras de cheques y de otros valores que organicen las entidades financieras;
- k) Establecer las denominaciones y características de los billetes y monedas;
- l) Disponer la desmonetización de los billetes y monedas en circulación y fijar los plazos en que se producirá su canje;
- m) Establecer las normas para la organización y gestión del banco, tomar conocimiento de las operaciones decididas con arreglo a dichas normas e

intervenir, según la reglamentación que dicte, en la resolución de los casos no previstos;

- n) Resolver sobre todos los asuntos que, no estando explícitamente reservados a otros órganos, el presidente del banco someta a su consideración.

Art. 15. — Como órgano de gobierno del banco, le corresponden al directorio:

- a) Dictar el estatuto del personal del banco, fijando las condiciones de su ingreso, perfeccionamiento técnico y separación;
- b) Designar a los subgerentes generales a propuesta del presidente del banco;
- c) Crear y suprimir agencias;
- d) Nombrar corresponsales;
- e) Elaborar y aprobar el presupuesto anual de gastos, el cálculo de recursos y los sueldos del personal, tanto para el banco como para la superintendencia de entidades financieras y cambiarias;
- f) Aprobar el balance general, la cuenta de resultados y la memoria.

CAPÍTULO IV

Administración general del banco

Art. 16. — La administración del banco será ejercida por intermedio de los subgerentes generales, los cuales deberán ser argentinos nativos o por naturalización, con no menos de diez (10) años de ejercicio de la ciudadanía. Deberán reunir los mismos requisitos de idoneidad que los directores.

Los subgerentes generales son los asesores del presidente y del directorio. En ese carácter asistirán a sus reuniones, a pedido del presidente o del directorio. Dependen funcionalmente del presidente o del funcionario que éste designe, que actuará en esta función con el nombre de gerente general.

Son responsables del cumplimiento de las normas, reglamentos y resoluciones del directorio y del presidente, para cuya aplicación, previa aprobación por el mismo, podrán dictar la reglamentaciones internas que fueren necesarias. Asimismo, deberán mantener informado al presidente sobre la marcha del banco.

CAPÍTULO V

Operaciones del banco

Art. 17. — El banco está facultado para realizar las siguientes operaciones:

- a) Emitir billetes y monedas;
- b) Otorgar descuentos a las entidades financieras por razones de iliquidez transitoria, que no excedan los quince (15) días corridos, hasta un máximo por entidad equivalente al patrimonio de ésta;
- c) Otorgar adelantos en cuenta a las entidades financieras por iliquidez transitoria, que no excedan los quince (15) días corridos con caución de títulos públicos u otros valores o con garantía o afectación especial o general sobre activos determinados, siempre y cuando la suma de los re-

descuentos y adelantos concedidos a una misma entidad, no supere en ninguna circunstancia, el límite fijado en el inciso anterior;

- d) Las derivadas de convenios internacionales en materia de pagos.

Los recursos que se proporcionen a las entidades financieras a través de los regímenes previstos en los incisos b) y c) precedentes, bajo ninguna circunstancia podrán carecer de garantías o ser otorgados en forma de descubiertos en cuenta corriente.

Los valores que en primer lugar se deberán afectar como garantía de estas operaciones, serán aquellos que tengan oferta pública y serán valorados según su cotización de mercado.

Los recursos que se proporcionen a las entidades financieras a través de los regímenes previstos en los incisos b) y c) precedentes, podrán ser renovados luego de transcurrido un período de treinta (30) días desde su cancelación. Estos redescuentos y adelantos le serán reintegrados al banco con preferencia a cualquier acreedor.

Art. 18. — El banco podrá:

- a) Comprar y vender a precios de mercado, en operaciones de contado y a término, títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de regulación monetaria y cambiaria;
- b) Obtener créditos desde el exterior;
- c) Comprar y vender oro y divisas. En caso que lo haga por cuenta y orden del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en su carácter de agente financiero del Estado federal, las pérdidas o utilidades que se generen, deberán ser acreditadas o debitadas al gobierno nacional;
- d) Recibir oro en custodia;
- e) Actuar como corresponsal o agente de otros bancos centrales, o representar o formar parte de cualquier entidad de carácter internacional existente o que se cree con el propósito de cooperación bancaria, monetaria o financiera;
- f) Recibir depósitos en moneda nacional o extranjera.

Art. 19. — Queda prohibido al banco:

- a) Conceder préstamos al gobierno nacional, a los bancos oficiales, provincias y municipalidades excepto lo prescripto en el artículo 20;
- b) Garantizar o endosar letras y otras obligaciones del gobierno nacional, de las provincias, municipalidades y otras instituciones públicas;
- c) Conceder préstamos a personas físicas o jurídicas no autorizadas para operar como entidades financieras;
- d) Efectuar redescuentos, adelantos u otras operaciones de crédito excepto en los casos previstos por el artículo 17, incisos b) y c) o los que eventualmente pudieran técnica y transitoriamente originarse en las operaciones de mercado previstas por el artículo 18, inciso a);
- e) Comprar y vender inmuebles, con la excepción de aquellas operaciones que sean necesarias para el normal funcionamiento del banco;

- f) Comprar acciones, salvo las emitidas por organismos financieros internacionales;
- g) Participar directa o indirectamente en cualquier empresa comercial, agrícola, industrial o de otra clase;
- h) Colocar sus disponibilidades en moneda nacional o extranjera en instrumentos que no gocen sustancialmente de inmediata liquidez;
- i) Emitir títulos, bonos o certificados de participación, de colocación o de cumplimiento obligatorio para las entidades financieras;
- j) Pagar intereses en cuentas de depósitos;
- k) Otorgar garantías especiales que directa o indirectamente, implícita o explícitamente, cubran obligaciones de las entidades financieras, incluso las originales en la captación de depósitos.

Art. 20. — El banco sólo podrá financiar al gobierno nacional a través de la compra, a precios de mercado, de títulos negociables emitidos por la Tesorería General de la Nación.

El crecimiento de las tenencias de títulos públicos del banco, a valor nominal, no podrá ser superior al diez por ciento (10 %) por año calendario.

Art. 21. — El banco, directamente o por medio de las entidades financieras, se encargará de realizar las remesas y transacciones bancarias del gobierno nacional, tanto en el interior del país como en el extranjero, recibirá en depósito los fondos del gobierno nacional y de todas las reparticiones autárquicas y efectuará pagos por cuenta de los mismos, sujeto a lo establecido en el artículo anterior.

El banco no pagará interés alguno sobre las cantidades depositadas en la cuenta del gobierno nacional ni percibirá remuneración por los pagos que efectúe por su cuenta, pero podrá cargarle los gastos que a su vez haya pagado a las entidades financieras.

El banco podrá disponer el traspaso de los depósitos del gobierno nacional y los de entidades autárquicas a las entidades financieras. Podrá asimismo, encargar a los bancos la realización de las operaciones bancarias de cualquier índole del gobierno nacional y de las reparticiones o empresas del Estado federal.

Art. 22. — El banco actuará por cuenta del gobierno nacional en la colocación de empréstitos públicos de cualquier clase y plazo y en la atención de los servicios de la deuda pública interna y externa.

En su carácter de agente financiero del Estado federal, el banco podrá reemplazar por valores escriturales, los títulos cuya emisión le fuera encomendada, expidiendo certificados globales. En tal caso los valores deberán registrarse en los respectivos entes autorizados por la Comisión Nacional de Valores de conformidad con las disposiciones de la ley 20.643 y sus modificatorias. Cuando las circunstancias lo justifiquen el banco podrá extender certificados provisorios.

El banco podrá colocar los valores en venta directa en el mercado o mediante consorcios financieros. Podrá promover y fiscalizar el funcionamiento de éstos. No podrá tomar suscripciones por cuenta propia. Cobrará comisión por los servicios mencionados, cargando su importe a la cuenta del gobierno nacional.

Art. 23. — El banco queda facultado para convenir con los agentes fiscales o pagadores, ad referendum del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, las medidas que juzgue más convenientes para la debida atención, por cuenta del gobierno nacional, de los servicios de la deuda pública externa.

Art. 24. — El banco cargará a la cuenta del gobierno nacional el importe de los servicios de la deuda pública interna y externa atendida por su cuenta y orden, así como los gastos que dichos servicios irroguen. El gobierno nacional pondrá a disposición del banco los fondos necesarios para la atención de dichos gastos, pudiendo el banco adelantarlos dentro de las limitaciones establecidas por el artículo 20.

Art. 25. — El banco facilitará al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos el control de todos los actos relativos a la colocación de empréstitos públicos y a la atención de los servicios de la deuda pública, incluso la inutilización y destrucción de valores y la inspección de los libros, registros y demás documentos relativos a tales operaciones, debiendo suministrarle, además, una información especial y detallada concerniente a su desempeño como agente financiero del Estado.

Art. 26. — El banco deberá informar al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos sobre la situación monetaria, financiera, cambiaria, flujo de fondos, balance de pagos y del producto e ingresos nacionales, formulando en cada caso las consideraciones que estime conveniente.

Art. 27. — El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos suministrará al banco las siguientes informaciones correspondientes a cada trimestre:

- a) Movimiento de entradas y salidas de la Tesorería General de la Nación por sus distintos conceptos;
- b) Detalle de la recaudación de los recursos en efectivo y del producto de los del crédito;
- c) Gastos comprometidos, conforme lo permita la implantación de la respectiva contabilidad;
- d) Estado de la deuda consolidada y flotante, tanto interna como externa.

Aparte de dichas informaciones, el banco deberá requerir al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, como a los demás ministerios, y reparticiones públicas aquellas otras que le fuesen necesarias o útiles a los fines del mejor cumplimiento de sus funciones.

CAPÍTULO VI

Efectivos mínimos

Art. 28. — Con el objeto de influir en la cantidad de dinero, el Banco Central de la República Argentina puede exigir que las instituciones financieras mantengan disponibles determinadas proporciones de los depósitos y otros pasivos. Estos requisitos de reserva no podrán ser remunerados.

No podrá exigirse la constitución de otro tipo de depósitos indisponibles o inmovilizaciones a las instituciones financieras.

La integración de los requisitos de reserva no podrá constituirse sino en dinero en efectivo o en depósitos a la vista en el banco.

CAPÍTULO VII

Régimen de cambios

Art. 29. — El banco deberá:

- a) Asesorar al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y al Honorable Congreso de la Nación en todo lo referente al régimen de cambios y establecer las reglamentaciones de carácter general que correspondiesen, las que serán implementadas por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias y de alcance obligatorio para los entes públicos y privados;
- b) Dictar las normas de cambios y ejercer o hacer ejercer a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias la fiscalización que su cumplimiento exija.

CAPÍTULO VIII

Emisión de moneda y reservas en oro y divisas

Art. 30. — El banco es el encargado exclusivo de la emisión de billetes y monedas de la Nación Argentina y ningún otro órgano del gobierno nacional, ni los gobiernos provinciales, ni las municipalidades, bancos u otras instituciones cualesquiera, podrán emitir billetes ni monedas metálicas ni otros instrumentos que fuesen susceptibles de circular como moneda.

Art. 31. — Los billetes y monedas del banco tendrán curso legal, en los términos de la ley 23.928, en todo el territorio de la República Argentina por el importe expresado en ellos. Los billetes llevarán el facsímil de la firma del presidente del banco y del funcionario que designe el directorio o de quienes los reemplacen en sus funciones.

Art. 32. — Toda vez que el banco compruebe la violación de su función exclusiva de emitir moneda deberá denunciar el hecho ante el Poder Ejecutivo nacional para que éste tome las medidas que correspondan.

Art. 33. — Hasta una tercera parte de las reservas de libre disponibilidad mantenidas como prenda común, podrán estar integradas con títulos públicos valuados a precio de mercado.

El banco podrá mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras operaciones a interés, en instituciones bancarias del exterior o en papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o en moneda extranjera.

CAPÍTULO IX

Cuentas, estados contables y fiscalización

Art. 34. — El ejercicio financiero del banco durará un (1) año y se cerrará el 31 de diciembre. Los estados contables del banco deberán ser elaborados de acuerdo a normas generalmente aceptadas, siguiendo los mismos principios generales que sean establecidos por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias para el conjunto de entidades.

Art. 35. — El banco publicará a más tardar dentro de la semana siguiente, los estados resumidos de su activo y pasivo al cierre de operaciones de los días siete (7), quince (15), veintitrés (23) y último de cada mes.

Art. 36. — La observancia por el Banco Central de la República Argentina de las disposiciones de esta Carta Orgánica y demás normas aplicables será fiscalizada por un síndico titular y uno adjunto, nombrados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado. Sus actuaciones comprenderán a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

Los síndicos podrán ser un abogado, un contador público nacional o un licenciado en economía. Durarán cuatro (4) años en sus funciones, al término de los cuales podrán ser designados nuevamente.

Los síndicos dictaminarán sobre los balances y cuentas de resultados de fin de ejercicio, para lo cual tendrán acceso a todos los documentos, libros y demás comprobantes de las operaciones del banco. Informarán al directorio, al Poder Ejecutivo nacional y al Honorable Congreso de la Nación sobre la observancia de esta ley y demás normas aplicables. Los síndicos percibirán por sus tareas la remuneración que se fije en el presupuesto del banco.

Art. 37. — No podrán desempeñarse como síndicos:

- a) Quienes se hallen inhabilitados para ser directores;
- b) Los cónyuges, parientes por consanguinidad en línea directa, los colaterales hasta cuarto grado inclusive y los afines dentro del segundo, de las autoridades mencionadas en los artículos 6º, 16 y 44.

CAPÍTULO X

Utilidades

Art. 38. — Las utilidades realizadas y liquidadas se afectarán prioritariamente a la capitalización del banco.

Las utilidades que no sean capitalizadas se utilizarán para el Fondo de Reserva General y para los Fondos de Reserva Especiales hasta que los mismos alcancen el cincuenta por ciento (50%) del capital del banco. Una vez alcanzado este límite, las utilidades no capitalizadas o aplicadas en los Fondos de Reserva, deberán ser transferidas libremente a la cuenta del gobierno nacional.

Las pérdidas realizadas por el banco en un ejercicio determinado, se imputarán a las reservas que se hayan constituido en ejercicios precedentes, y si ello no fuera posible, afectarán al capital de la institución, en cuyo caso el gobierno nacional deberá hacer el aporte correspondiente para restituirlo durante el año fiscal siguiente.

Auditoría externa

Art. 39. — Los estados contables del banco deberán contar con la opinión de auditores externos, designados por el directorio entre aquellos que se encuentren inscritos en un registro especial, el cual ha de ser creado y reglamentado por el directorio. Las firmas que efectúen las tareas de auditoría no podrán prestar el servicio por más de cuatro (4) períodos consecutivos, no pudiendo reanudar la prestación del mismo hasta que hayan transcurrido por lo menos otros cuatro (4) períodos.

Las informaciones que obtiene la auditoría externa del banco con respecto a las entidades financieras en particular, tienen carácter secreto y no podrán dárseles a conocer sin autorización expresa del banco.

El informe de los auditores externos deberá ser elevado por el directorio tanto al Poder Ejecutivo nacional como al Honorable Congreso de la Nación; en el caso de este último, se deberá concretar en ocasión de la remisión del informe anual que dispone el artículo 10, inciso i).

Del ente de control externo

Art. 40. — Las disposiciones de la Ley de Contabilidad sólo son de aplicación al banco en cuanto a la verificación de que las erogaciones encuadren en el presupuesto y a la rendición de cuentas documentadas que, en plazos no superiores a un (1) año, deberá presentar al ente de control externo del sector público.

Art. 41. — Las utilidades del Banco Central de la República Argentina no están sujetas al impuesto a las ganancias. Los bienes y las operaciones del banco reciben el mismo tratamiento impositivo que los bienes y actos del gobierno nacional.

Información económica

Art. 42. — Incumbe al banco compilar y publicar regularmente las estadísticas monetarias y financieras así como los balances de pagos y las cuentas nacionales de la República Argentina.

El banco podrá realizar, asimismo, investigaciones técnicas sobre temas de interés para la política monetaria, cambiaria y financiera.

CAPÍTULO XI

Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias

Art. 43. — El Banco Central de la República Argentina ejercerá la supervisión de la actividad financiera y cambiaria por intermedio de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias la que dependerá directamente del presidente de la institución.

Art. 44. — La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias es un órgano desconcentrado, presupuestariamente dependiente del Banco Central y sujeto a las auditorías que el mismo disponga. Su administración estará a cargo de un superintendente, un vicesuperintendente y los subgerentes generales de las áreas que la integren.

El vicesuperintendente ejercerá las funciones del superintendente en caso de ausencia, impedimento o vacancia del cargo. Fuera de dichos casos, desempeñará las funciones que el superintendente le asigne o delegue.

Art. 45. — El superintendente y el vicesuperintendente serán designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del presidente del banco. Deberán reunir las mismas condiciones que establece esta ley para los directores del banco y no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad dispuestas para los mismos. La duración en sus funciones será de cuatro (4) años. Sólo podrán ser removidos de sus cargos por las mismas causas que los directores del banco.

Art. 46. — Al superintendente le corresponde, en el marco de las políticas generales fijadas por el directorio

del banco y poniendo en conocimiento del mismo las decisiones que se adopten, las siguientes funciones:

- a) Autorizar la apertura de nuevas entidades financieras o cambiarias y la de filiales o sucursales de entidades financieras extranjeras;
- b) Autorizar la apertura de sucursales de entidades financieras y los proyectos de fusión de las mismas;
- c) Aprobar las transferencias de acciones que según la Ley de Entidades Financieras requieran autorización del banco;
- d) Calificar a las entidades financieras a los fines de la Ley de Entidades Financieras;
- e) Cancelar la autorización para operar en cambios;
- f) Aprobar los planes de regularización y/o saneamiento de las entidades financieras;
- g) Implementar y aplicar las normas reglamentarias de la Ley de Entidades Financieras, dictadas por el directorio del banco;
- h) Establecer los requisitos que deben cumplir los auditores de las entidades financieras y cambiarias.

Art. 47. — Son facultades propias del superintendente:

- a) Establecer el régimen informativo y contable para las entidades financieras y cambiarias;
- b) Disponer la publicación de los balances mensuales de las entidades financieras, estados de deudores y demás informaciones que sirvan para el análisis de la situación del sistema;
- c) Ordenar a las entidades que cesen o desistan de llevar a cabo políticas de préstamos o de asistencia financiera que pongan en peligro la solvencia de las mismas;
- d) Dictar normas para la obtención, por parte de las entidades financieras, de recursos en moneda extranjera y a través de la emisión de bonos, obligaciones y otros títulos, tanto en el mercado local como en los externos;
- e) Declarar la extensión en la aplicación de la Ley de Entidades Financieras a personas no comprendidas en ella, cuando así lo aconsejen el volumen de sus operaciones y razones de política monetaria, cambiaria o crediticia, previa consulta con el presidente del banco;
- f) Aplicar las sanciones que establece la Ley de Entidades Financieras, por infracciones cometidas por las personas o entidades, o ambas a la vez, a las disposiciones de la misma, y
- g) Ejercer las demás facultades que las leyes otorgan al banco relativas a la Superintendencia, con excepción de las expresamente atribuidas por esta ley al directorio del banco.

Art. 48. — En su carácter de administrador, son también atribuciones del superintendente:

- a) Establecer las normas para la organización y gestión de la superintendencia, y
- b) Nombrar, promover y separar al personal de la superintendencia, de acuerdo con las normas que se dicten a dichos efectos y disponer la sustanciación de sumarios.

Art. 49. — El superintendente podrá, previa autorización del presidente del banco, disponer la suspensión transitoria, total o parcial de las operaciones de una o varias entidades financieras, por un plazo máximo de treinta (30) días. De esta medida se deberá dar posterior cuenta al directorio.

Durante este período serán nulos los compromisos que aumenten los pasivos de las entidades y se suspenderá la exigibilidad y devengamiento de sus intereses. La suspensión transitoria de operaciones, en ningún caso dará derecho a los acreedores al reclamo por daños y perjuicios contra el banco o el Estado federal.

Por intermedio del presidente del banco, el superintendente podrá solicitar al directorio se revoque la autorización para operar de una entidad financiera o se disponga su liquidación. En tal caso el directorio deberá evaluar tal solicitud en un plazo máximo de quince (15) días corridos a partir del momento de la solicitud. Este plazo será prorrogable, por una única vez, por otros quince (15) días corridos.

Art. 50. — La superintendencia podrá requerir, de las empresas y personas comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, la exhibición de sus libros y documentos, pudiendo disponer el secuestro de la documentación y demás elementos relacionados con transgresiones a dichas normas.

Art. 51. — La superintendencia podrá requerir de las entidades financieras, casas y agencias, oficinas y corretores de cambio, exportadores e importadores u otras personas físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en operaciones de cambio, la exhibición de sus libros y documentos, el suministro de todas las informaciones y documentación relacionadas con las operaciones que hubieren realizado o en las que hubieren intervenido y disponer el secuestro de los mismos y todo otro elemento relacionado con dichas operaciones.

Art. 52. — La superintendencia se encuentra facultada para formular los cargos ante los fueros correspondientes por infracciones a las normas cambiarias y financieras y para solicitar embargos preventivos y demás medidas precautorias por los importes que se estimen suficientes para garantizar las multas y reintegros que sean impuestos por juez competente.

Art. 53. — Las informaciones que obtiene la superintendencia en el ejercicio de sus facultades de inspección tienen carácter secreto. Los funcionarios y empleados intervinientes no deben darlas a conocer sin autorización expresa de la superintendencia, aun después de haber dejado de pertenecer a la misma.

Art. 54. — La superintendencia podrá requerir el auxilio de la fuerza pública si encuentra obstáculos o resistencia en el cumplimiento de las funciones de inspección a su cargo. Deberá además requerir, sin demora, de los tribunales competentes, las órdenes de allanamiento que sean necesarias.

CAPÍTULO XII

Jurisdicción

Art. 55. — El Banco Central de la República Argentina, está sometido exclusivamente a la jurisdicción federal. Cuando sea actor en juicio, la competencia nacional será concurrente con la de la justicia ordinaria de las provin-

cias. El banco podrá, asimismo, prorrogar jurisdicción a favor de tribunales extranjeros.

Art. 56 — El presidente del banco y el superintendente podrán absorber posiciones en juicio por escrito, no estando obligados a hacerlo personalmente.

CAPÍTULO XIII

Disposiciones transitorias

Art. 57 — Las operaciones crediticias vigentes al momento de promulgarse la presente ley deberán estar detalladas en un balance inicial y, durante los plazos que se establezcan para su recuperación final, no estarán sujetas a las restricciones generales que sobre este tipo de operaciones se fijan en la presente ley.

Art. 58 — El primer directorio que sea designado de acuerdo con lo prescripto por esta ley, con la excepción del presidente y vicepresidente, dispondrá a través de un sorteo que la mitad de sus integrantes permanezcan en funciones sólo por medio período. Una vez alcanzado el mismo, quienes lo reemplacen, serán designados por un mandato completo de seis (6) años, mediante el procedimiento establecido en el artículo 7º.

Art. 59 — Los miembros del directorio y de la sindicatura que se hallen en funciones al promulgarse la presente ley, continuarán ejerciéndolas hasta que sean confirmados en sus cargos por el procedimiento establecido en el artículo 7º o se proceda a su reemplazo.

Art. 60 — Deróganse a partir de la vigencia de esta Carta Orgánica la ley 21.572 (creación de la Cuenta de Regulación Monetaria) y el decreto 4.611/58 (Fiscalización del Régimen Cambiario por el Banco Central), ratificado por la ley 14.467.

Art. 61 — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

EDUARDO MENEM.

Hugo R. Plombaum.

Sr. Presidente (Britos). — En consideración.

Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Cendoya. — Señor presidente, señores senadores: la ausencia de nuestro senador por la Capital Federal nos va a privar de la exposición que seguramente tenía preparada para referirse a este importante proyecto sobre la nueva Carta Orgánica del Banco Central y sobre modificaciones a la ley de entidades financieras.

Parece, verdaderamente, un lujo de este Parlamento poder discutir estos asuntos dado que, excepto el debate sostenido en 1935 con motivo de la creación del Banco Central, las sucesivas modificaciones se produjeron durante gobiernos de facto.

Todas las leyes de entidades financieras —salvo excepciones de ocasión o modificaciones parciales— fueron dictadas por regímenes de facto. Incluso rescato una curiosa referencia histórica: en el año 1946 el general Perón gana las

elecciones y, seguramente por sus influencias con el gobierno de facto vigente, hizo tratar una iniciativa de esta naturaleza en el período que va desde febrero de 1946 hasta su asunción como presidente de la República.

Posteriormente se produce la revolución de 1955 y el régimen de facto de entonces también dicta un decreto-ley de entidades financieras y de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Más tarde, el propio Onganía y su ministro Krieger Vasena sancionan por decreto-ley las disposiciones de estas importantísimas herramientas de ordenamiento económico y financiero.

Lo mismo sucede con el golpe de 1976, cuando el general Videla y su ministro de Economía, el doctor Martínez de Hoz, sancionan otro decreto-ley por el cual de establecía el régimen de entidades financieras.

Solamente en 1973, durante la vigencia de las instituciones democráticas, se trataron aspectos circunstanciales de la ley de entidades financieras con relación a un tema al que se le daba más importancia de la que tenía: la nacionalización de los depósitos, acerca del que felizmente la iniciativa de la mayoría y el dictamen de la minoría coinciden en no insistir.

Es verdaderamente decisivo para la estabilidad económica y financiera de un país contar con una buena ley de entidades financieras y una buena Carta Orgánica del Banco Central.

Samuelson, por ejemplo, en su archiconocido manual de economía política cita una anécdota verdaderamente interesante, originada en un viejo economista norteamericano. En ella se señala que desde el comienzo de los tiempos los tres inventos más grandes que ha tenido la humanidad fueron la rueda, el fuego y el banco central. Esto nos da una pauta de la importancia que se asigna a este cuerpo normativo y a la posibilidad de que ahora tengamos que discutir en el Parlamento este instrumento, que es —como ya he señalado— de significativa trascendencia para la estabilidad y el desarrollo económico del país.

El Banco Central fue creado en 1935 y con variantes continúa funcionando hasta la fecha. Esta institución fue diseñada como consecuencia de la crisis mundial de 1930 con el objeto de paliar esa situación. Pero sucede que fue pensado para un país unitario y no para un país que cuenta con un sistema federal de gobierno.

Todas estas circunstancias me han provocado —dado que nosotros también suscribimos el dictamen que conducirá a la aprobación de este im-

portante instrumento legal— profundas tribulaciones que he superado pensando en aquello que decía Sarmiento de que las cosas hay que hacerlas; mal, pero hay que hacerlas.

No obstante los graves inconvenientes que me voy a permitir señalar en el curso de mi breve exposición, creo que es necesario expresar que se debe contar con estas normas. El Banco Central constituye, en última instancia, la garantía de la estabilidad financiera, de un país.

Galbraith dice que los italianos fueron los inventores de los bancos, que nacieron precisamente en el Valle del Po y que luego fueron trasladados como creaciones del ingenio humano a Inglaterra, donde se instalaron en Londres en la denominada calle de los lombardos.

Si los bancos son instituciones italianas, el invento del papel moneda es fundamentalmente norteamericano, como consecuencia de las necesidades financieras producidas durante la guerra de la revolución por la independencia.

En cambio, el banco central es un invento típicamente inglés que nace hace varios siglos como banco de bancos, con la diferencia de que en dicho país asumía las dos funciones: atendía al público y también controlaba la actividad de los demás bancos suministrando en última instancia liquidez y confiabilidad al sistema cuando éste peligraba. Recuerdo de un interesante libro escrito por este prestigioso economista norteamericano de Harvard que la actuación decidida del Banco de Inglaterra salvó al sistema financiero mundial en reiteradas oportunidades. Trae como recuerdo de ello que en 1890 la Baring Brothers se encontró con 21 millones de títulos de la deuda externa argentina que no tenían ningún valor de cotización ni de mercado; a raíz de ello la sociedad centenaria prestamista de la Argentina se encontraba al borde de la insolvencia, pero fue salvada por la actuación providencial del Banco Central.

Esta necesidad de preservar el sistema financiero de cada país a través de un banco central que controle y monopolice la emisión, regule el crédito y determine las tasas de interés, como motor de la actividad económica, crea también la necesidad de contar con un instrumento adecuado a dichos fines. Puedo citar incluso la crisis que está viviendo en este momento Europa, donde se reclama la constitución de un banco central del mercado común que asegure, a partir de las conclusiones del Tratado de Maastricht, un tratado monetario para Europa.

Pero reitero que el diseño de banco central de Inglaterra no es adecuado y no se ajusta a nuestra normativa constitucional.

Incluso, países fundadores del federalismo en general en el mundo, como Estados Unidos de América, tienen, además del Banco de la Reserva Federal con sede en Washington, doce bancos centrales locales que administran la política de crédito y la asignación de recursos en cada una de las regiones —es decir, no en todos los Estados, pero sí en las regiones— en resguardo de la descentralización administrativa, de la cual el federalismo constituye la mayor garantía política.

Por otra parte, en un nuevo federalismo en auge, precisamente en una de las naciones más importantes de la vida actual, Alemania —que es una república federal—, el Banco Central tiene filiales en cada una de las *landers* que componen ese sistema federal.

Y esto me produce también una duda respecto de si este federalismo nostálgico que uno viene reclamando no puede parecer a lo mejor una vana invocación retórica dado que aparentemente el federalismo financiero es un lujo de los países ricos y los países que no tienen la condición de primer mundo o los que estamos en desarrollo no somos merecedores de tener ese sistema.

Señor presidente: por lo expuesto sostengo que los bancos de provincia reconocen fundamentos constitucionales en los artículos 1º, 5º, 31, 67, 104 y 108, que consideran que los estados federales pueden crear sus propios bancos sin necesidad de la autorización del Banco Central. Incluso, podrían emitir moneda si el Congreso Nacional así lo autorizase.

Y estas facultades constitucionales aparecen totalmente olvidadas en el proyecto que estamos considerando. No atribuyo tampoco esto a alguna circunstancia que tenga que ver con una parcialidad política. Nosotros también pasamos nuestro propio período de gobierno de 1983 hasta 1989 valiéndonos de leyes que desconocían el federalismo financiero.

Y ello también lleva a la conclusión de que esto ha surgido sin duda por puras necesidades económicas, olvidándose de la normativa y del fundamento constitucional del federalismo financiero.

Un prestigioso profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, Jesús Abad Hernando, especialista en el tema, se plantea esta cuestión en una importante publicación realizada en "La Ley". El artículo se titula: *El Banco Central y la potestad de regulación de la moneda y del crédito* y dice así: "La 'política financiera', en cuanto dirección de un sistema de

moneda y de crédito, es posible con los límites que fijan la Constitución, la ley y, en su caso y consecuencia, el Reglamento al efecto del Poder Ejecutivo.

"Para concluir esta especie de 'proemio' a la problemática planteada «se está refiriendo al tema del federalismo financiero», a manera de principio básico, cabe recordar con el ilustre iusfilósofo italiano Giorgio del Vecchio que: 'La moral y el derecho dominan toda la vida humana, salvaguardando sus valores esenciales; en consecuencia, el derecho domina a la economía, porque ésta es una parte de la actividad inter-individual, y, por tanto, un sector del área regulada por el derecho', y Felice Battaglia ha considerado que 'el derecho tiene la virtud cohesiva de compenetrar a los hombres que pueden quedar como disociados en el terreno de la economía'".

Más adelante dice: "Sin perjuicio de ello, en un Estado federal que admite dos centros del poder, Estado general y Estados particulares, corresponde un análisis de las facultades delegadas, que quedan referidas al gobierno federal y facultades conservadas (artículos 1º, 5º, 67 inciso 5º y concs.; 104 a 108, Constitución Nacional)". Y sigue diciendo que además, por el caso del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que en virtud de lo dispuesto por los artículos 31 y 104 de la Constitución Nacional y del Pacto de San José de Flores, que fue el que posibilitó la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación, se reservó el manejo de dicho Banco, que ha venido subsistiendo hasta el momento con algunas dificultades en cuanto a sus relaciones con la Banca Central.

Por ello, todas las constituciones provinciales han regulado los aspectos que les corresponden, en cuanto a retener las facultades que les asigna la Constitución Nacional como facultades no delegadas, de crear las provincias sus propios Bancos e, incluso, de emitir moneda si así lo autoriza el Congreso de la Nación.

Esta facultad provincial ha sido también señalada por la Corte Suprema de Justicia, que ha dicho que es derecho propio de cada provincia fundar Bancos del Estado, que no pueden ser desconocidos o restringidos por el Congreso u otro órgano del gobierno federal. Y ello no sólo para la provincia de Buenos Aires por su reserva.

Para no agotar la atención de los señores senadores mencionaré que ese informe concluye diciendo: "¿Pueden conciliarse los intereses provinciales indubitables con la alta finalidad que

inspira un sistema que pretende la optimización nacional?". Se menciona que es necesario que se señalen reglas claras y precisas, que justamente esta ley no contiene.

En la nota se indica con motivo de que la provincia de Buenos Aires quiso modificar el artículo 31 de la Constitución Nacional estableciendo la necesidad de respetar el Pacto de San José de Flores, que el General Bartolomé Mitre, en 1878, con la lucidez del patriota que se eleva, advierte que sólo la igualdad de todas las provincias era la garantía de construcción de la República.

Y termina la exposición con las palabras del general Mitre, que menciono a continuación: "Si el Pacto de San José de Flores hubiere creado privilegios exclusivos a favor de una provincia respecto de otras, nuestro país no sería una nación con vida orgánica, no sería una asociación, sería una agrupación. Entonces sí que ya tendría en su seno el principio de la disolución prematura, el germen de la muerte... Puedo decir esto con los sentimientos de verdadero argentino, con el amor de hijo de esta Provincia que represento, con la autoridad moral que puede darme el hecho de haber sido uno de los que proyectaron la reforma y, me será permitido agregar, que también con la de gobernante que complementó el Pacto del 11 de noviembre, que me tocó la fortuna de hacer práctico para bien de todos. Lo repito, el Pacto del 11 de noviembre no ha dado ningún derecho ni privilegio a Buenos Aires que no corresponda igualmente a todas y cada una de las demás provincias hermanas".

En todo el texto del proyecto de ley que estamos analizando —y que requiere una sanción por razones que atañen al mantenimiento de la estabilidad económica— no se hace ninguna referencia a las provincias como no sea para sus traerles facultades que nunca fueron delegadas por ellas al gobierno nacional.

En efecto, en uno de sus artículos esta iniciativa establece que el Estado nacional no puede prestar ni al gobierno nacional ni a los gobiernos provinciales, ni a los municipios crédito alguno, salvo las excepciones que figuran en el artículo siguiente. Y en éste se estipula la excepción solamente en favor del Estado nacional.

También en el texto hay una previsión que, a mi juicio, importa una restricción a las facultades no delegadas por las provincias, que hacen a su propio gobierno. Se dispone que el Congreso jamás podrá autorizar a las provincias ni a las comunas a emitir billetes ni otros instrumentos

que puedan ser calificados como moneda, lo que prácticamente impide que los estados provinciales puedan hacer uso del crédito público para financiar sus necesidades públicas que, como digo, jamás fueron delegadas a la Nación.

Consideremos el caso reciente de aquellas provincias que, por razones que sus respectivos gobernadores habrán juzgado oportunas, emitieron bonos que de alguna manera solucionaron el financiamiento de los estados provinciales, sin perjuicio de que puedan haber afectado algunas provisiones de la política monetaria llevada a cabo por el gobierno central.

Esta disposición relativa a que no puede emitirse instrumento alguno que pueda ser calificado como moneda es absolutamente restrictiva de estas facultades provinciales, y puede traer graves conflictos institucionales en el futuro. Asimismo, puede ser impugnada, conforme la citada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Es cierto que el término de moneda que utiliza la Constitución Nacional para consagrar una facultad exclusiva de la Nación, no tiene la misma inteligencia en la economía de la actualidad. Hoy se considera moneda no solo el oro y los billetes, sino cualquier medio de pago. Un autor dice que moneda es todo lo que sirve para comprar cosas o pagar servicios. La principal moneda en circulación está constituida por los depósitos bancarios, situación que no estaba prevista en la ciencia económica al momento de dictarse la Constitución de 1853.

Pero esto no impide que el tema hubiera podido solucionarse por la concertación o por la vía de incluir en la Carta Orgánica del Banco Central la posibilidad de que existiera en el seno de su conducción una representación que reconociera la personalidad política de las provincias. Como he dicho, esto está salvado en los Estados Unidos, ya en el siglo pasado. Allí, preocupados por la crisis de los bancos, crearon un sistema de reserva federal pero con localizaciones regionales que permitieron una descentralización de la política monetaria y financiera.

Debemos hacer notar que, en algún momento, las provincias llegaron a tener algún escáño en el Directorio del Banco Central, cosa que ahora no se admite, o por lo menos no se prevé de ninguna forma en este texto del proyecto que estamos considerando.

Incluso en el país, señor presidente, señores senadores, la Asociación de Bancos de Provincias realizó un primer aporte al tema de la necesidad de contar con una ley de entidades finan-

cieras y una nueva Carta Orgánica del Banco Central: presentó un proyecto completo que federalizaba dicho banco y creaba dependencias en el resto de las provincias. Yo no sé si esto hubiera significado un costo adicional al sistema; es posible. Pero lo cierto es que probablemente habría significado mucho menos que el mantenimiento del actual sistema de liquidación de bancos privados. Desde la crisis del BIR el Banco Central liquidó hasta ahora más de 200 entidades financieras entre bancos, cajas de ahorro para préstamos para la vivienda, financieras, etcétera.

Estas 200 liquidaciones todavía están en trámite en el Banco Central requiriendo una dotación de personal para el mantenimiento de la estructura de liquidación de cerca de mil funcionarios. De las 200, sólo cuatro han podido cerrar definitivamente sus cuentas y el resto representa una pesada carga para el sistema del Banco Central, que no financia sólo la Nación sino ésta y todas las provincias.

De todos modos, el Banco Central fracasó, es cierto, estrepitosamente, en los últimos cuarenta años en preservar el valor de la moneda y la ley actual toma resguardos a esos fines.

El sistema es muy parecido al de Alemania en cuanto coloca al Banco Central en dependencia directa del Congreso de la Nación. Ya no va a depender más del Poder Ejecutivo, como hasta ahora, siendo un proveedor de recursos, provocando déficit fiscal durante años y constituyendo la causa de las últimas inflaciones o megainflaciones.

Voy a referirme a algunas disposiciones del proyecto que fueron observadas por nuestro bloque en la discusión en la Cámara de Diputados y que no fueron consideradas. Una es la relativa al secreto bancario, establecido por la ley actual de entidades financieras y por una ley posterior que amplió las facultades de relevamiento del secreto bancario, que está limitado exclusivamente para las operaciones pasivas. Es decir que los bancos no pueden dar informes de los depósitos que reciben.

El miembro informante manifestó que el secreto de las operaciones activas podían tener justificativo en épocas en que la garantía de los depósitos hacía innecesario que cada depositante controlara la solvencia del banco, porque en cualquier supuesto el Estado lo cubría. Pero no tiene sentido en la actualidad. Yo entiendo que precisamente la tendencia moderna discurre en sentido contrario a lo que indicaba el miembro informante de la mayoría en la Cámara de Dipu-

ados, porque de lo que ahora se trata en todo el mundo es de que los bancos controlen el origen y la calidad de sus depósitos, sobre todo teniendo en cuenta el volumen fabuloso de transferencias de recursos que se obtienen por el lavado de narcodólares. Por lo tanto, en Estados Unidos se le exige a cada banco que averigüe de dónde provienen esos fondos.

De todos modos, entiendo que esto se puede corregir con una reglamentación del Banco Central, porque también me parece que escapa al sentido común que estas operaciones activas puedan ser reveladas a cualquier persona. Considero que lo menos que tendría que acreditarse es el interés legítimo por parte de quien requiere informaciones acerca de esta problemática.

Como aspecto positivo de esta iniciativa destacamos la creación de este organismo tan importante, en dependencia ésta del Poder Legislativo y no del Ejecutivo, siguiendo la tradición alemana. En Estados Unidos el organismo equivalente es totalmente independiente.

Sin embargo, no existe excusa para haber obviado el cumplimiento de la ley y el reconocimiento de que las provincias, como estados locales del régimen federal, conservan la posibilidad de dirigir sus propias políticas financieras.

En homenaje a la gente del interior que trabajó con denuedo y entusiasmo sobre este tema, cuya iniciativa no llegó a tener tratamiento legislativo, solicito la incorporación en el Diario de Sesiones del proyecto elaborado por la Asociación de Bancos de Provincias, proyecto que contó en su momento con buena difusión periodística y, según creo, constituye un antecedente indispensable a tener en cuenta cuando las condiciones permitan que los argentinos podamos regresar al seno de la Constitución y del federalismo.

Sr. Presidente (Britos). — La Presidencia recuerda a los señores senadores que está en consideración un proyecto de ley en segunda revisión, razón por la cual los señores miembros informantes cuentan con treinta minutos para efectuar sus exposiciones.

Tiene la palabra la señora senadora por Santa Fe.

Sra. Gurdulich de Correa. — Señor presidente: considerando el quórum estricto que existe en este momento; que este proyecto —como ya se adelantara— no tiene demasiadas modificaciones y las que posee fueron introducidas en la ley de entidades financieras, solicito

que se inserten los conceptos que tenía preparados para expresar y que pasemos a la votación.

Sr. Presidente (Britos). — En consideración el artículo 1º, que modifica los artículos 1º a 60 de la ley 20.539.

Sr. Posleman. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — Como se va a votar una cantidad de artículos, deseo hacer una consulta sobre una cuestión que he estado analizando y que se refiere específicamente a una modificación que ha introducido la Cámara de Diputados respecto de una condición que deben tener los superintendentes y los vicesuperintendentes de las entidades financieras.

Según el proyecto sancionado por este cuerpo, la designación se hacía por el Ejecutivo y a propuesta del presidente del cuerpo. Esto ha sido modificado y en los artículos 10, inciso e) y 45, el superintendente y el vicesuperintendente tienen que ser miembros del directorio.

Creo que este hecho merece una explicación: ¿por qué razón estos funcionarios, que dependen en definitiva del presidente y del directorio del cuerpo, que es el órgano de conducción, pueden ser miembros del propio directorio? Es decir, es una incongruencia en punto a que quien debe mandar pasa a ser subordinado sin resignar el cargo anterior.

Si la explicación resulta satisfactoria, no voy a hacer observaciones. Pero, de lo contrario, voy a proponer que se insista en la redacción que oportunamente sancionó el Senado para el artículo 10, inciso e), y el artículo 45, que son concordantes. Ambos tratan el mismo tema.

No sé si ha quedado clara la pregunta. No quisiera extenderme mucho más y me gustaría que algunos de los miembros de la comisión que han trabajado en este asunto me informaran sobre el particular.

Sr. Presidente (Britos). — El señor senador por San Juan ha hecho una consulta.

Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Cendoya. — Quisiera que reformulara la consulta porque no logré captar todo el texto.

Sr. Presidente (Britos). — Hizo referencia a los artículos 10 y 45.

Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — El artículo 45, en su nueva redacción dice: "El superintendente y el vicesuperintendente serán designados por el Poder

Ejecutivo nacional a propuesta del presidente del banco, de entre los miembros del directorio". Esa frase "de entre los miembros del directorio" ha sido incorporada al texto que oportunamente sancionara la Cámara de Senadores. Es decir que ha sido incorporada por Diputados.

Se agrega, además, otra aclaración: que la duración de sus funciones será de tres años o hasta la conclusión de su mandato como director si éste último fuera menor.

Esta es la mención acerca de estos miembros —el superintendente y el vicesuperintendente— tienen que haber sido previamente directores del banco; si no, no pueden ocupar estos cargos.

Esto no estaba previsto en la iniciativa. Lo que quiero saber es por qué se ha cambiado y por qué se desjerarquiza a los miembros del directorio del banco, que se entiende son superiores en cuanto a su jerarquía y a sus facultades, para transformarlos en superintendentes. Debe haber una razón.

No he tenido oportunidad de consultar el texto del debate parlamentario de Diputados para saber cuáles son las razones. Por eso, para mí esta cuestión no tiene una fundamentación clara. Además creo que no se deben confundir las funciones de quienes ocupan los diferentes cargos.

Tampoco se aclara si quien de director pasa a ser superintendente deja ese cargo o debe seguir siendo director. Digo esto porque el directorio se vería disminuido en dos miembros. Es decir que es una incongruencia bastante difícil de superar.

Por esta razón pido que se me dé una explicación. De lo contrario, quiero dejar sentado que voy a formular una moción para que se insista en el texto aprobado por este Senado respecto de estos dos artículos.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Cendoya. — Señor presidente: no sé si la mayoría tiene antecedentes sobre este asunto, pero supongo que la iniciativa de designar a los dos superintendentes de entre los miembros del directorio quizás responde a la necesidad de no incrementar el número de funcionarios de esa jerarquía y tomarlos desde el propio directorio del Banco Central en virtud de la especialización que se les exige para el tema.

Por otra parte, también se puede reconocer algunos antecedentes en leyes anteriores de entidades financieras en las que se estableció, por ejemplo, que el presidente del Banco de la Na-

ción o el presidente del Banco de Desarrollo eran miembros del directorio del Banco Central, y si no había incompatibilidad para que pudiera ser simultáneamente titular de ambos cargos, no creo que esto constituya una restricción insalvable.

Para descomprimir lo solemne y lo tedioso que puede resultar el tema, quisiera hacer llegar al señor senador por San Juan las reflexiones que hace el economista que he citado sobre el supuesto halo de misterio y de infalibilidad que rodea a estos funcionarios y que generalmente no es tal. Dice Galbraith, en *El dinero: de dónde viene y a dónde va*, que reconociendo lo relativamente inocuo del Consejo de la Reserva Federal —es decir, el Banco Central de los Estados Unidos—, los presidentes de Estados Unidos lo han usado en ocasiones como lugar de depósito no sólo de los fondos públicos sino también de personas respecto a las que no podía confiarse que pudieran mantener balanceados sus propios talonarios de cheques. La señorita Margaret Truman, en los muy agradables recuerdos que hace de su padre, no ha dejado la menor duda de que una de las personas que su padre designó en un tiempo agregado naval sabía por lo menos sumo.

La reflexión que hago *animus jocandi* significa que a mi juicio los recaudos tomados en el texto que viene en revisión de Diputados aseguran el funcionamiento de ambas instituciones, que antes estaban totalmente juntas dentro de las funciones propias del Banco Central, como dos entidades separadas, pero con direcciones de igual composición. No creo que haya ningún inconveniente insalvable sobre este aspecto.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra la señora miembro informante por la mayoría, senadora por Santa Fe.

Sra. Gurdulich de Correa. — Señor presidente, cuando se sancionó en la Cámaras de senadores la Carta Orgánica del Banco Central la cuestión se reducía, a nuestro criterio, al tema monetario y cambiario. En la Cámara de Diputados la cuestión fue ampliada con consentimiento del Banco Central, de modo que se incorporó el tema bancario. Por eso se consideró que el superintendente tenía que ser miembro del directorio del Banco.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Mazzuco. — Una breve consideración, señor presidente. Creo que es bueno lo que establece el artículo 45, porque de esa forma el superintendente y el vice serán funcionarios que

tengan acuerdo del Senado. Este es el primer tamiz. Es importante que estos dos altísimos funcionarios no sean traídos de la calle sin asegurarnos de que reúnan las condiciones de un director.

Sra. Gurdulich de Correa. — Muy bien.

Sr. Mazzuco. — De modo tal que creo salvable este artículo.

Sr. Menem. — Que se vote.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — Entre todos hemos dado en la clave. Creo que este es el verdadero sentido que ha tenido este cambio. Es una forma indirecta de decir que el superintendente y el vicesuperintendente deben tener el acuerdo del Senado, lo que me parece bien. En consecuencia, me doy por satisfecho.

Sr. Molina. — Que se vote.

Sr. Presidente (Britos). — Se va a votar el artículo 1º.

— La votación resulta afirmativa

— Se enuncian y aprueban los artículos 2º a 12.

— El artículo 13 es de forma.

Sr. Presidente (Britos). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

Sr. Presidente (Britos). — Se va a votar la inserción solicitada por la señora senadora por Santa Fe.

— La votación resulta afirmativa

Sr. Presidente (Britos). — Se procederá en consecuencia.¹

Sr. Cendoya. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Cendoya. — Señor presidente: solicité la inserción del trabajo realizado por los técnicos de la Asociación de Bancos de Provincia en un proyecto de ley que nunca tuvo estado parlamentario. No sé si ese pedido de inserción fue aprobado.

Sr. Presidente (Britos). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la inserción solicitada por el señor senador por Córdoba.

— La votación resulta afirmativa

Sr. Presidente (Britos). — Se procederá en consecuencia.¹

¹ Ver el Apéndice.

TRANSFERENCIA GRATUITA DE INMUEBLES ESTATALES EN FAVOR DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS

Sr. Rubeo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Rubeo. — Señor presidente: habiendo consultado con los presidentes de los distintos bloques y dado el quórum exiguo que hay voy a solicitar respetuosamente que tratemos un proyecto presentado por señores senadores de distintos bloques del Honorable Senado, vinculado con la transferencia gratuita de inmuebles estatales en favor de provincias, municipios y comunas. Se trata de un proyecto que ha sido distribuido oportunamente a los señores senadores.

No quiero abundar ahora en argumentaciones, por lo que pido que los conceptos que pensaba vertir en el recinto sobre este asunto se inserten luego en el Diario de Sesiones.

En consecuencia, solicito concretamente que el proyecto de ley contenido en el expediente S.-785/92 sea tratado sobre tablas.

Sr. Presidente (Britos). — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador por Santa Fe.

Si no se hace uso de la palabra...

Sr. Bravo Herrera. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Britos). — ... se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Bravo Herrera. — Señor presidente: antes de que se pasara a votar yo había pedido la palabra, de manera que la votación no se debería tomar en cuenta.

Lamento oponerme al tratamiento sobre tablas de un proyecto tan importante como éste.

Las iniciativas cuyo tratamiento se solicita sobre tablas deben tener carácter de urgente y, en este caso, no veo esa urgencia. Asimismo, considero que es un proyecto que tiene una gran complejidad. Su texto llegó a mi despacho a las cinco de la tarde, cuando el comienzo de la sesión era inminente y, por tal motivo no he tenido la oportunidad de leerlo completamente.

Reitero: el proyecto merece un estudio más detenido porque deja sin efecto leyes que han sido de muy difícil tramitación, como la de venta de inmuebles de las Fuerzas Armadas, cuya elaboración llevó más de tres años. Además de ello